



**UDH**  
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO  
<http://www.udh.edu.pe>

**UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO**  
**Escuela de Post Grado**

**MAESTRÍA EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**

**TESIS**

**DILACIÓN DEL PROCESO DE DIVORCIO POR  
CAUSAL PRODUCIENDO LA NULIDAD PROCESAL  
EN EL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE  
HUANUCO 2014**

**Para optar el Grado Académico de  
Magister en Derecho  
Mención Derecho Procesal**

**Autora**

**ABILIA CONSUELO SIFUENTES Y BARRUETA**

**Huánuco – Perú**

**2015**

## **DEDICATORIA**

El presente trabajo de tesis lo dedico con mucho afecto:

A mi querida hija Analíe Cecilia Huamán Sifuentes y a mí querida nieta Valeria Alejandra Marchan Huamán, por ser la razón de mí vivir y mi constante superación.

A mi querida madre, quien me impulso superarme y hoy desde el cielo ilumina mi vida.

## **AGRADECIMIENTO**

Mis agradecimientos profundos:

A los Docentes de la Escuela de Post Grado de la Universidad de Huánuco, por su enseñanza que ha repercutido en mi vida personal y profesional.

A mi Asesor por su orientación y asesoramiento para concluir con la presente investigación.

.

## INDICE

Pág.

DEDICATORIA.....	ii
AGRADECIMIENTO .....	iii
RESUMEN.....	ix
SUMMARY .....	xi
PRESENTACIÓN .....	xiii

## CAPÍTULO I

### INTRODUCCIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	15
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	17
1.2.1.PROBLEMA PRINCIPAL.....	17
1.2.2.PROBLEMAS ESPECÍFICOS.....	17
1.3. RELEVANCIA TEÓRICA, TÉCNICA Y ACADÉMICA. ....	17
1.4. APOORTE CIENTIFICO.....	19
1.5. ANTECEDENTES INMEDIATOS.....	20
1.6. OBJETIVOS .....	20
1.6.1.OBJETIVOS GENERALES. ....	20
1.6.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ....	21

## CAPÍTULO II

### MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO.....	22
2.2. ASPECTOS CONCEPTUALES Y DOCTRINARIOS.....	22
2.2.1.INTRODUCCIÓN.....	22
2.2.2.LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA .....	26
2.2.3.EL DEBIDO PROCESO.....	32
2.2.4.EL TIEMPO EN EL DERECHO Y EN EL PROCESO .....	36
2.2.5.EL ACTO JURÍDICO PROCESAL .....	42
2.2.6.EL PLAZO Y EL TÉRMINO PROCESAL .....	43
2.2.7.EL DERECHO A OBTENER UNA SENTENCIA EN UN PLAZO RAZONABLE .....	51
2.2.8.LA DILACIÓN INDEBIDA DEL PROCESO.....	60
2.2.9.LOS DERECHOS QUE SE CONTRAVIENEN CON LA DILACION DEL PROCESO.....	63

2.2.10. ... PROCESO DE CONOCIMIENTO - VÍA PROCEDIMENTAL EN LA QUE SE TRAMITAN LOS PROCESOS DE DIVORCIO POR CAUSAL.....	65
2.2. LA NULIDAD PROCESAL.....	80
2.2.1.- INTRODUCCION.....	80
2.2.2.- FORMA EN LOS ACTOS PROCESALES.....	82
2.2.3.- DEFINICIÓN .....	84
2.2.4.- VICIOS QUE DAN ORIGEN A LA NULIDAD .....	90
2.2.5.- CLASES DE NULIDAD SEGÚN LOS ACTOS PROCESALES ..	92
2.2.6.- PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LA NULIDAD PROCESAL	93
2.2.7.- LOS PRINCIPIOS EN LA LEGISLACIÓN PROCESAL .....	97
2.2.8.- REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.....	110
2.2.9.- INADMISIBILIDAD E IMPROCEDENCIA.....	113
2.2.10. TRAMITE DE LA NULIDAD PROCESAL .....	115
2.2.11. EFECTOS DE LA DECLARACION DE NULIDAD .....	118
2.3. RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES EN LA DILACION DE LOS PROCESOS DE DIVORCIO POR CAUSAL .....	121
2.3.1.EL JUEZ Y SUS DEBERES COMO DIRECTOR DEL PROCESO	121
2.3.2.LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL .....	130
2.3.3.RESPONSABILIDAD E INDEPENDENCIA JUDICIAL .....	135
2.3.4.RESPONSABILIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA RESPECTO A LA DEMORA DE LOS PROCESOS.....	136
2.3.5.LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL, LAS NULIDADES Y LA DILACION PROCESAL .....	138
2.3. DEFINICIONES OPERACIONALES.....	142

## **CAPÍTULO III**

### **METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN**

2.4. MÉTODO, TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN .....	144
2.4.1.MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN .....	144
2.4.2.TIPO DE INVESTIGACIÓN .....	145
2.4.3.NIVEL DE INVESTIGACIÓN.....	145
2.5.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .....	145
2.6. HIPÓTESIS. ....	145
2.6.1.Hipótesis General. ....	145
2.6.2.Hipótesis Específicos. ....	146
2.6.3.SISTEMA DE VARIABLES.....	146

2.6.4.DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .....	146
2.7. COBERTURA DE ESTUDIO .....	147
2.7.1.POBLACIÓN .....	147
2.7.2.MUESTRA .....	147
2.7.3.UNIDADES DE ANÁLISIS .....	147
2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.....	147

## **CAPÍTULO IV RESULTADOS**

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN CUADROS Y GRÁFICOS.....	151
4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS ABOGADOS LITIGANTES.....	151

## **CAPÍTULO V**

### **DISCUSIÓN DE RESULTADOS**

5.1.VERIFICACIÓN O CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.....	161
5.2.NUEVOS PLANTEAMIENTOS .....	163
CONCLUSIONES.....	165
SUGERENCIAS .....	166
BIBLIOGRAFÍA .....	167

## CUADROS ESTADISRTICOS

<b>CUADRO Nº 1</b> ¿Conoce usted el instituto del proceso de divorcio establecido en el código procesal civil? .....	152 <u>3</u>
<b>CUADRO Nº 2</b> ¿Cree Ud. que los jueces de los juzgados de familia de Huánuco conocen el instituto del proceso de divorcio establecido en el código procesal civil? .....	153
<b>CUADRO Nº3</b> ¿Cree Ud. que los jueces de los juzgados de familia de Huánuco aplican correctamente el instituto del proceso de divorcio establecido en el código procesal civil para administrar justicia? .....	154
<b>CUADRO Nº 4</b> ¿Cree usted que los jueces superiores de la sala civil de la corte superior de Huánuco, conocen el instituto del proceso de divorcio establecido en el código procesal civil? .....	155
<b>CUADRO Nº 5</b> ¿Cree Ud. que es importante la correcta aplicación del instituto del proceso de divorcio por causal para la administración de justicia? .....	156
<b>CUADRO Nº 6</b> ¿Es necesario que los magistrados de los juzgados de familia apliquen correctamente el instituto del proceso de divorcio por causal para la administración de justicia?.....	157
<b>CUADRO Nº 7</b> ¿si se aplica el instituto del proceso de divorcio por causal en el juzgado de familia de Huánuco con el código procesal civil, en qué sentido se está utilizando? .....	158

## GRAFICOS ESTADISTICOS

- GRAFICO Nº 1** ¿Conoce usted el instituto del proceso de divorcio establecido en el Código procesal civil? ..... 152
- GRAFICO Nº 2** ¿Cree Ud. que los jueces de los juzgados de familia de Huánuco conocen el instituto del proceso de divorcio establecido en el código procesal civil? ..... 153
- GRAFICO Nº 3** ¿Cree Ud. que los jueces de los juzgados de familia de Huánuco aplican correctamente el instituto del proceso de divorcio establecido en el código procesal civil para administrar justicia? ..... 154
- GRAFICO Nº 4** ¿Cree usted que los jueces superiores de la sala civil de la corte superior de Huánuco, conocen el instituto del proceso de divorcio establecido en el código procesal civil? ..... 1565
- GRAFICOS Nº 5** ¿Cree Ud. que es importante la correcta aplicación del instituto del proceso de divorcio por causal para la administración de justicia? ..... 156
- GRAFICO Nº 6** ¿Es necesario que los magistrados de los juzgados de familia apliquen correctamente el instituto del proceso de divorcio por causal para la Administración de justicia?..... 157
- GRAFICO Nº 7** ¿Si se aplica el instituto del proceso de divorcio por causal en el juzgado de familia de Huánuco con el código procesal civil, en qué sentido se está utilizando? ..... 158



## **RESUMEN**

En el presente trabajo de investigación se tomó como punto de análisis la dilación del proceso de divorcio por causal produciendo la nulidad procesal de en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco 2014, pues en la actualidad existen procesos judiciales cuyo fallo de última instancia se está emitiendo con mucha dilación, causando perjuicio a los usuarios que solicitan tutela jurisdiccional; siendo una de las causas, la nulidad procesal en que se incurre en la tramitación de los mismos; lo que origina que las sentencias u otros actos procesales emitidos en primera y segunda instancia sean declaradas nulos, incluso en más de una oportunidad, retardando innecesariamente la emisión de la sentencia definitiva.

Los Magistrados y los Auxiliares Jurisdiccionales deben tener mayor cuidado al momento de tramitar los procesos; es decir, cuidando de que, cada acto procesal, desde la notificación, hasta calificación de las demandas, proveídos de escritos, sentencias, entre otros; se realicen en forma adecuada desde el principio hasta el final.

Los Fiscales, Asistentes de Función Fiscal y Abogados litigantes, deben coadyuvar en que los procesos que se tramitan en forma adecuada; por estar inmersos en la administración de justicia, pudiendo comunicar a los Jueces de alguna nulidad procesal que adviertan cuando tengan contacto con el proceso.

En el marco teórico contiene teorías científicas que sustentan a las variables que fundamentan la naturaleza de la dilación del proceso de divorcio por causal, por ser relevante estas teorías científicas.

En el marco metodológico de la investigación precisamos el tipo, nivel, método y diseño de investigación que es fundamentado por el metodólogo ASTI VERA, Armando, donde existe coherencia y relación entre cada uno de ellos a fin de garantizar la consistencia del trabajo de investigación.

En los resultados demostramos la no aplicación correcta del instituto en el proceso de divorcio por causal con el Código Procesal Civil, generando perjuicio a los sujetos procesales.

## **SUMMARY**

In the present research work was taken as a point of analysis procrastination of the divorce process for producing causal procedural invalidity of the First Family Court of Huánuco 2014, as currently there are lawsuits whose failure ultimately being broadcast with much delay, causing injury to users requesting legal protection; It is one of the causes, procedural nullity incurred in the processing thereof; which causes statements or other procedural acts issued in first and second instance are declared void, even in more than one occasion, unnecessarily delaying the issuance of the final decision.

Judges and court staff should be extra careful when processing processes; that is, ensuring that every procedural act, the notification, to classification of claims, provided with writings, statements, among others; They are conducted properly from the beginning to the end.

Prosecutors, Assistant Attorney Function and Trial Lawyers, should assist in the proceedings conducted properly; by being immersed in the administration of justice, the judges may communicate some procedural nullity when they warn wetted.

In the theoretical framework that sustains scientific theories contains variables underlying the nature of the delay in the process of divorce on grounds, to be relevant these scientific theories.

In the methodological framework of the research we need the type, level, method and research design is based on the methodologist ASTI VERA, Armando, where there is consistency and relationship between each of them to ensure the consistency of the research.

The results show the incorrect application of the institute in the divorce process by causal with the Code Civil, generating prejudice the procedural subjects.

## **PRESENTACIÓN**

El presente trabajo de investigación lo presento ante los señores jurados evaluadores para optar el Grado Académico de Magister en Derecho en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Escuela De Post Grado y tiene un campo de estudio delimitado, está referido a la problemática de la dilación del proceso de divorcio por causal como produciendo la nulidad procesal de en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco 2014; actualmente, la administración de Justicia en nuestro país es lenta, por lo que los justiciables tienen que esperar mucho tiempo para que se resuelva en forma definitiva sus procesos, circunstancia que hace que la justicia obtenida pueda convertirse en ineficaz; ya que, aquél que demanda tutela judicial desea que ésta sea efectiva; es decir, que su pedido sea atendido en forma rápida; sobre todo si se trata de personas, que por sus condiciones personales o estado de salud requieren que se les brinde tutela judicial en forma inmediata.

Sin embargo, ello no ocurre y los procesos terminan resolviéndose en un tiempo demasiado lato; y, siendo extremistas, podría ocurrir que cuando finalmente se resuelva el proceso judicial, sea demasiado tarde; ya sea porque, el demandante decidió tomar la justicia por sus propias manos o porque su estado de salud se agravó a tal extremo que se produjo su deceso.

Estos hechos sin duda, hacen que la colectividad en general, perciba a la Administración de Justicia como un órgano ineficiente,

al que no le tienen confianza. Esta lentitud se debe a muchos factores, entre los que se encuentran la carga procesal excesiva; la falta de preparación de jueces y de personal jurisdiccional, quienes muchas veces tramitan los procesos en forma negligente, incurriendo en nulidad procesal; y, asimismo, otro factor que convierte en lenta e ineficaz la Administración de Justicia es la presentación de recursos dilatorios, maliciosos y sin fundamento alguno, por parte de algunos abogados de las partes del proceso, quienes en vez de coadyuvar con la administración de justicia, la entorpecen.

Para el estudio, en su conjunto, se ha establecido el siguiente esquema: En el Capítulo I, se plantea y formula el problema de investigación; del mismo modo, se considera los objetivos, la justificación, importancia y limitaciones. En el Capítulo II, Se desarrolla el Marco Teórico, sobre el que se desenvuelve el fenómeno social investigado. En el Capítulo III, la metodología y las técnicas; las hipótesis y variables; técnicas e instrumentos utilizados en la investigación. En el IV Capítulo, se presenta los resultados. En el Capítulo V, se presenta la discusión de los resultados; Finalmente se expone las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos.

## **CAPÍTULO I**

### **INTRODUCCIÓN**

#### **1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

En la actualidad existen procesos judiciales cuyo fallo de última instancia se está emitiendo con mucha dilación, esto es después de muchos años de iniciados; causando perjuicio a los usuarios que solicitan tutela jurisdiccional, ya que ésta les es brindada en forma tardía, cuando lo correcto sería que los procesos se tramiten en un plazo razonable, sin mayor dilación que la estrictamente necesaria. Al parecer, la causa principal de que ello ocurra sería que se está incurriendo en nulidad procesal al momento de tramitar los procesos. Si ello no fuera así, se podría obtener una sentencia definitiva en un plazo más breve, beneficiándose a los justiciables; ya que aun habiéndose interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la Sala Superior tendría que pronunciarse sobre el fondo del asunto, o habiéndose interpuesto casación contra la sentencia de vista, por la causal de contravención a las normas

que garantizan el debido proceso, dicho recurso no prosperaría; es decir, no habría motivos para declarar nula la sentencia por haberse incurrido en errores en la tramitación del proceso.

Dicha dilación repercute en la obtención de la sentencia definitiva; por tanto afecta directamente a los justiciables involucrados en ellos. Poniendo un ejemplo extremo sobre este punto, imaginémonos que la pretensión de un justiciable bastante entrado en años, es que se declare su divorcio, para que de esa manera pueda solicitar la extinción de la pensión alimenticia que viene otorgando a su aún cónyuge, no obstante encontrarse separado de hecho de ella por más de 10 años e incluso ésta convive con otro hombre desde hace buen tiempo; siendo el caso que la pensión alimenticia que otorga, trae como consecuencia que reciba una magra pensión de jubilación, que no le permite siquiera solventar adecuadamente sus medicinas ni su propia alimentación; por ello, es que solicita tutela jurisdiccional y desea que su pedido sea atendido prontamente; sin embargo, por una serie de errores procesales, se ha declarado la nulidad de todo lo actuado en dos ocasiones, lo cual retarda la finalización del proceso y por tanto, mantiene en constante preocupación al justiciable, por cuanto el proceso no tiene cuándo acabar; y, cuando finalmente se obtiene el fallo definitivo a su favor, no puede disfrutar del mismo, por cuanto, debido a la enfermedad que padecía, se



ha producido su deceso; definitivamente en este caso en particular, la administración de justicia se ha tornado ineficaz para dicha persona por la lentitud en que se resolvió su pretensión, dada a su edad avanzada y a los problemas de salud del referido justiciable.

## **1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.**

### **1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL**

¿En qué medida la nulidad procesal afecta la tutela jurisdiccional produciendo o no la dilación de los procesos de divorcio por causal en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco 2014?

### **1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS**

- ¿En qué medida los actos procesales generan nulidad procesal, originando dilación en los procesos de divorcio por causal?
- ¿Qué grado de responsabilidad tienen los Jueces en la ocurrencia de la nulidad procesal, en los procesos de Divorcio por causal?

## **1.3. RELEVANCIA TEÓRICA, TÉCNICA Y ACADÉMICA.**

Se justifica porque se llegó a conocer y evaluar la realidad jurídica y social sobre la poca celeridad en los procesos judiciales y cómo influye en el desarrollo institucional del Distrito Judicial de Huánuco.

Considero que es importante determinar si la nulidad procesal origina dilación en los procesos de Divorcio por causal; es decir, aquellos casos resueltos por el Primer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Huánuco en el año 2014; ya que, al comprobarse dicha situación, se tomaran las medidas adecuadas para enmendar los errores en que se están incurriendo en la administración de justicia, justamente aquéllos que dilatan el proceso, haciendo que la decisión final se obtenga en un plazo demasiado lato y muchas veces irrazonable; que incluso puede llegar a convertir una sentencia en ineficaz, por su emisión tardía.

Un proceso tramitado con dilación, hace ineficaz a la administración de justicia; por cuanto lo pretendido por la parte demandante es resuelto con mucha demora, pudiendo darse el caso de que, cuando se emita la sentencia en forma definitiva, la referida sentencia ya no le sea beneficiosa al demandante, por haberse convertido su reclamo en irreparable.

No es posible que los justiciables permanezcan por tanto tiempo con la incertidumbre de no saber cuál de las dos partes, va a ser finalmente favorecido con lo que se resuelva en forma definitiva; por ello, todos aquellos que participen en la administración de justicia; vale decir, Jueces, Fiscales, Abogados, Auxiliares jurisdiccionales y Asistentes de Función Fiscal, deben asumir conciencia que la labor que ellos realizan

es sumamente importante para el proceso, y sobre todo ésta debe ser realizada con sumo cuidado, a fin de no incurrir en nulidades procesales, que a la larga van a ocasionar que se tenga que declarar la nulidad del proceso, incluso, desde la resolución número uno.

#### **1.4. APOORTE CIENTIFICO**

Con la presente investigación contribuimos en garantizar los derechos del demandante, como el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la dignidad de la persona, y el derecho la reparación del daño.

Para evitar incurrir en nulidades procesales, las Cortes Superiores de Justicia deberían promover mayores programas de capacitación para sus integrantes, y además, cada Juez o Secretario Judicial también debería tomar conciencia de los puntos en los que debe capacitarse para mejorar su desempeño funcional.

Con el fin de no incurrir en nulidades procesales, los procesos deben tramitarse con el mayor cuidado posible; es decir, cada acto procesal por más sencillo que sea, que puede ser desde una notificación, hasta calificación de demandas, proveídos de escritos, sentencias, entre otros deben realizarse en forma adecuada desde el principio y seguir una secuencia en ese sentido.

Por lo que consideramos evitar incurrir en nulidades procesales que vician el proceso, sobre todo del Juez, ya que conforme a lo previsto en el artículo 50 del Código Procesal Civil, es el Director del Proceso y además debe velar por su rápida solución; lo que implica que es él, el encargado de verificar que todos los actos procesales realizados al interior del proceso se hayan realizados conforme a Ley; lo que puede hacer cada vez que el secretario de la causa le dé cuenta de algún requerimiento efectuado por las partes y al firmar cualquier decreto y/o resolución; ello ahorraría el tiempo que se pierde cuando se incurre en una nulidad insubsanable, la cual debe declararse en aras de garantizar el debido proceso.

Por lo tanto la investigación debe ser tomada como un antecedente en la formulación de teorías ulteriores respecto a este tema.

#### **1.5. ANTECEDENTES INMEDIATOS.**

Respecto de la presente investigación, se puede indicar que no existen investigaciones, tesis elaboradas o libros que hayan abordado el problema materia de la investigación.

#### **1.6. OBJETIVOS**

##### **1.6.1. OBJETIVOS GENERALES.**

Determinar si la nulidad procesal afecta la tutela jurisdiccional produciendo o no la dilación de los procesos de divorcio por causal en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco 2014.

### **1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.**

- a)** Determinar qué actos procesales generan nulidad procesal, originando dilación en los procesos de divorcio por causal
- b)** Establecer la responsabilidad de los Jueces en la ocurrencia de la nulidad procesal, en los procesos de Divorcio por causal.

## **CAPÍTULO II**

### **MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL**

#### **2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO.**

Respecto de la presente investigación, se puede indicar que no existen investigaciones, tesis elaboradas o libros que hayan abordado el problema materia de la investigación.

#### **2.2. ASPECTOS CONCEPTUALES Y DOCTRINARIOS**

##### **DILACION DE LOS PROCESOS DE DIVORCIO POR CAUSAL**

##### **2.2.1. INTRODUCCIÓN**

A manera de introducción, cabe mencionar que la famosa y arcaica “dilación procesal”, en la que se ha incurrido, se incurre y se incurrirán “n” veces en los procesos judiciales, es un mal social no reciente, cuasi intrínseca a los mismos, que causa indignación principalmente a los usuarios de los servicios de justicia; ya que los procesos en los que están involucrados no tienen cuando acabar.

En reiteradas ocasiones, la insatisfacción de los justiciables se ha dado por la sola demora de los procesos, esto obviamente vulnera principios procesales como el de celeridad procesal, el de economía, y en mayor instancia el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. El principio de celeridad procesal se encuentra positivizado en el cuarto párrafo del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil; comentando este principio el profesor TEOFILO IDROGO manifiesta, “el fin supremo del Derecho es alcanzar la justicia y para lograrla los procesos deben ser dinámicos, breves, sencillos, evitando dilaciones estériles y simplificando los formulismos propios del Derecho Procesal Romano” (IDROGO DELGADO, Teófilo: “Principios fundamentales y reguladores del derecho procesal civil”, en: Principios Generales y Especiales del Derecho, 1era. ed., enero, 2005, MARSOL, p. 85), seguidamente arguye, “por aplicación de este principio, los procesos se convierten en sumarios. De allí que los jueces no deben admitir recursos dilatorios que entorpezcan su normal desenvolvimiento. Su admisibilidad agravia a los litigantes y a la colectividad, que son los espectadores y fiscalizadores del órgano jurisdiccional.

En relación al principio de economía procesal, éste también se encuentra positivizado en el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Civil; al respecto el argentino PEYRANO,

siguiendo al español GUASP, señala “que todas las concreciones doctrinarias y legislativas del principio de economía procesal se han edificado en torno a un trípode de miras: la economía del tiempo, la de esfuerzos y la de gastos” (Vid. PEYRANO, Jorge: “El proceso civil – Principios y fundamentos”, edit. Astrea, BB.AA. Argentina), y líneas adelante precisa “que la morosidad en dilucidar los debates, no sólo conlleva un detrimento para la imagen de la justicia que tiene la mayoría de los justiciables, que suponen que sus pretensiones serán satisfechas con acierto y prontitud a poco que el tribunal se avoque a su conocimiento, sino que también redundaría en el encarecimiento del litigio”.

De similar parecer es el profesor trujillano IDROGO, cuando explica que “al aplicarse el principio de economía procesal en nuestros procesos, especialmente en el de conocimiento, se cumplirán la perentoriedad de los plazos, se simplificarán los actos de procedimiento, se obligará a las partes a cumplir con los deberes de veracidad, lealtad y buena fe en las dos instancias y no se concederán los recursos indiscriminadamente, tutelando los derechos de las partes más débiles que se encuentran en conflicto.

Clara Mosquera Vásquez en su artículo “Alcances para la reforma del Poder Judicial”, cita a la Comisión Andina de Juristas, y señala que “Es necesario el fortalecimiento del



Poder Judicial a través de una mejora y democratización del servicio público de justicia, garantizando la solución justa, imparcial, técnica y oportuna de los conflictos, como el mayor acceso de los ciudadanos”. (MOSQUERA, Clara. Artículo “Alcances para la Reforma Judicial”. Diálogo con la jurisprudencia N° 61. Lima 2003. pp 131-138.)

Si se produjera esa mejora señalada por la doctora Mosquera, el servicio de justicia sería más eficiente, en el sentido de que los ciudadanos obtendrían una respuesta oportuna a su pedido de tutela jurisdiccional; y, ello conllevaría a que el Poder Judicial recupere su imagen frente a la colectividad en general.

En el libro: Los retos de la Justicia en el siglo XXI, se señala que “La lentitud de la Justicia constituye una de sus lacras tradicionales. Influyen en ella, las leyes procesales y el funcionamiento deficiente de la oficina judicial”. (Bandrés, Casares, García Giner y Ramos. Los retos de la justicia en el siglo XXI. Estudis. Barcelona. Primera edición.2000. pp. 68.)

Es necesario recalcar que el tiempo en el proceso puede enaltecer y satisfacer al justiciable, también al Estado Constitucional de Derecho (que es quien ostenta el poder de administrar justicia), así como también puede sucumbir y catapultar en el olvido, los derechos de quien pretende ostentar o efectivizar dichos derechos; al respecto, el

recordado procesalista uruguayo Couture mencionaba que “El tiempo en el proceso es más que oro, es justicia”; asimismo, se trae a colación un par de frases populares en relación a ello: “una justicia que tarda no es justicia” o “tan injusta es una decisión incorrecta como una decisión tardía”.

### **2.2.2. LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA**

Siguiendo las paradigmáticas palabras de CHIOVENDA, quien sentenciaba lo siguiente: “El proceso debe dar en lo posible y a quien tiene derecho prácticamente todo aquello y precisamente aquello que él tiene derecho de conseguir”, asimismo, refería que “se debe impedir, en cuanto sea posible, que la necesidad de servirse del proceso para la defensa del derecho se convierta en daño de quien se ve constreñido a accionar o defenderse en juicio para pedir justicia”.

El Dr. CHAMORRO BERNAL entiende que “el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, es la forma constitucional de proteger los demás derechos fundamentales, lo que en definitiva garantiza al ciudadano el derecho a la prestación judicial. ¿Qué es la prestación judicial? Pues es aquel derecho que garantiza al ciudadano que en cuanto tenga algún problema jurídico, pueda plantearlo ante un órgano jurisdiccional y éste le dé una solución, la que sea. Esto es el contenido de la tutela judicial efectiva. (Mesa redonda con

BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo, CHAMORRO BERNAL, Francisco, GUILHERME MARINONI, Luiz y PRIORI POSADA, Giovanni: “Algunas reflexiones sobre el posible cambio de paradigma respecto a la Tutela Jurisdiccional Efectiva”, en: Ius Et Veritas, Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la PUCP, N° 39, diciembre, 2009, p. 320.) garantías, luego del cual se expedirá una resolución fundada en Derecho con posibilidad de ejecución” (PRIORI POSADA, Giovanni: “La efectiva tutela jurisdiccional de las situaciones jurídicas materiales: hacia una necesaria reivindicación de los fines del proceso”, en: Ius Et Veritas, Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la PUCP, año XIII, N° 26, p. 280; puede revisarse todo este interesante y abundante trabajo, que *in extenso* trata el tema de la tutela jurisdiccional efectiva.).

Señala PRIORI, citando a CHAMORRO BERNAL y a RAMOS MENDEZ, que “la efectividad de la tutela jurisdiccional sin duda constituye el rasgo esencial de este derecho, de forma tal que una ‘tutela que no fuera efectiva, por definición, no sería tutela’. Es por ello que ‘el sistema procesal trata de asegurar que el juicio cumpla el fin para el que está previsto’”.

Distingue PRIORI dos sentidos en los que puede ser entendida la “efectividad” de la tutela: “Según el primero de ellos, todas y cada una de las garantías que forman parte del

derecho a la tutela jurisdiccional efectiva deben tener una real y verdadera existencia. Por ello, la doctrina sostiene que: '(...) efectividad quiere decir que el ciudadano tenga acceso real y no formal o teórico a la jurisdicción, al proceso y al recurso; que pueda defenderse real y no retóricamente, que no se le impongan impedimentos irrazonables a ello. Asimismo, efectividad quiere decir que la persona afectada por un juicio sea llamada al mismo, que no se le hurte una resolución al amparo de formalismos exagerados y que la resolución decida realmente el problema planteado (...)’.

Según el segundo sentido para entender la efectividad, ésta tiene que ver con la real y verdadera tutela que debe brindar el proceso a las situaciones jurídicas materiales amenazadas o lesionadas. Es decir, en este segundo sentido la tutela jurisdiccional efectiva tiene que ver directamente con el hecho que el proceso debe cumplir la finalidad a la que está llamado a cumplir. De esta manera, es indispensable que la tutela jurisdiccional de los derechos y de los intereses- sea efectiva. No toda forma de tutela satisface el precepto constitucional; su actuación exige que el juez disponga de los instrumentos y de los poderes para hacer conseguir al interesado el bien de la vida (la utilidad) que el ordenamiento jurídico reconoce y garantiza. El

principio de efectividad se vincula, entonces, a una concepción entre el derecho sustancial y procesal, porque la tutela jurisdiccional es indispensable para la actuación del derecho sustancial. El simple reconocimiento de una posición jurídica no es suficiente: la tutela jurisdiccional debe garantizarle su actuación'. De esta manera, un diseño de tutela jurisdiccional inadecuado provocaría la insatisfacción del derecho material, es decir, su vulneración. En otras palabras una tutela jurisdiccional no efectiva provoca la ineficacia de la situación jurídica sustancial" (CHAMORRO BERNAL, Francisco; SICA, Marco y CAPPELLETTI, Mauro son citados por PRIORI POSADA, Giovanni, op. cit., pp. 280-281.)

Sintetizando y haciendo nuestras las palabras de PRIORI, decimos que "el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se agota en el acceso de los ciudadanos al proceso, ni en que el proceso sea llevado con todas y las más absolutas garantías previstas para su desarrollo; sino que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva va más allá de ello, y alcanza hasta la satisfacción plena de la situación jurídica material lesionada o amenazada en todos aquellos casos, claro está, en que se ampare la pretensión del demandante"

Asimismo, este derecho se encuentra positivizado en nuestra Constitución en el artículo 139 inciso 3, que prescribe: "Son

principios y derechos de la función jurisdiccional: 3) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva”. Así como está redactado este artículo, ha generado confusión y discrepancias en nuestro derecho, ya que existen diferentes posiciones sobre la relación existente entre la “tutela jurisdiccional efectiva” y el “debido proceso”; siendo que para algunos son en sustancia lo mismo (sinónimos); para otros, el segundo es un contenido del primero; otros dicen que son diferentes y operan en orden secuencial, siendo primero la tutela jurisdiccional efectiva y luego el debido proceso y otros dicen que en realidad el debido proceso es más amplio que la tutela jurisdiccional efectiva, porque el primero se aplica en todos los ámbitos mientras que el segundo solo a los procesos judiciales.

No obstante todo ello, lo que sí es innegable es el origen de ambos institutos, ya que el debido proceso proviene del derecho anglosajón (*common law*), mientras que el segundo del derecho romano-germánico (*civil law*). Pese a lo antedicho, seguimos la tesis del español CHAMORRO BERNAL en cuanto refiere que la tutela judicial efectiva comprende “todo aquello que sea necesario para que desde que el ciudadano acceda a los tribunales hasta que se le reconozca efectivamente lo que se ha resuelto.

Siendo así, la tutela básicamente, se podría dividir en cuatro partes: (i) el derecho del libre acceso a los tribunales; (ii) la prohibición de la indefensión, por el derecho de defensa que forma parte del proceso debido; (iii) el derecho a una resolución; y, (iv) el derecho a hacer efectiva la resolución. Si falla alguno de esos escalones, pues falla la tutela en sí. Resumiendo, el debido proceso es un elemento indispensable de la tutela, sin debido proceso no hay tutela”

También el Código Procesal Constitucional ha zanjado un poco el tema, estableciendo en el artículo 4 que “El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso [...]”.

Asimismo, señala en el último párrafo de dicho articulado que:

“Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y

temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal”.

### **2.2.3. EL DEBIDO PROCESO**

Para tener una mejor idea y más claridad sobre estos temas, de tal forma que en adelante nos ayuden a enfocar con mejor ángulo el problema de esta investigación, es que preferimos detallar someramente el contenido del debido proceso; Asimismo, como ya vimos *ut supra* es ya común compartir la idea, pese a algunas discrepancias, de que el debido proceso es un contenido del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, en ese sentido, como abordamos el tema de la dilación procesal, pues ocurriendo está en el *iter* procesal, es evidente que si se vulnera con ella el plazo razonable que debe durar un proceso según el derecho en pleito, pues infringiéndose éste, automáticamente resulta violado el derecho al debido proceso y en mayor grado la tutela jurisdiccional efectiva.

El debido proceso, también denominado “*defensa en juicio*” o “*due process of law*” es de origen inglés y alcanzó su primera expresión positiva en la famosa Carta Magna de Juan Sin Tierra, en la que principalmente adquirió el sinónimo de “contradicción y publicidad de los juicios”. Sin embargo, actualmente, ya no es así, pues su contenido es lato y no sólo restringido a la bilateralidad, sino a todo el recorrido del



proceso desde que se inicia con la demanda hasta obtener la ejecución de la sentencia, valga decir como en la terminología clásica del proceso, abarca todas sus etapas, desde la postulatoria hasta la ejecutoria. Además de aquella salvedad que lo han hecho notar tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en el sentido que el “debido proceso”, no solo le corresponde al ámbito procesal (o solo jurisdiccional), sino también a otros campos como el administrativo o incluso al derecho material.

El procesalista argentino GOZAINI nos precisa los alcances de este derecho, señalando como su contenido lo siguiente: “a) ningún justiciable puede ser privado de un derecho sin que se cumpla un procedimiento regular fijado por ley, y de no haber ley razonable que establezca el procedimiento, ha de arbitrarlo el juez de la causa, b) ese procedimiento no puede ser cualquiera sino que tiene que ser ‘debido’, c) para que sea ‘debido’, tiene que dar suficiente oportunidad al justiciable de participar con utilidad en el proceso, d) esa oportunidad requiere tener noticia fehaciente (o conocimiento) del proceso y de cada uno de sus actos y etapas, poder ofrecer y producir prueba, gozar de audiencia (ser oído)”.

Agregando lo que dice CARRION LUGO, “el debido proceso importa precisamente la correcta observancia de esos elementos reguladores del proceso”.

Dentro del contenido de este derecho Constitucional, el citado profesor argentino considera, entre otros: “el derecho a ser oído dentro de un proceso rápido, sencillo y eficaz. Derecho a ejecutar de inmediato lo resuelto. Derecho a que todo proceso sea resuelto en un plazo razonable”.

El maestro ALVARADO VELLOSO, señala que “desde el siglo pasado, la doctrina publicista refiere insistentemente al *debido proceso* como un claro derecho constitucional de todo particular y como un deber de irrestricto cumplimiento por la autoridad” (ALVARADO VELLOSO, Adolfo: “Introducción al estudio del derecho procesal”, primera parte, RUBINZAL-CULZONI EDITORES, p. 247.); no obstante eso, él conceptúa a esta institución basado en su preclaro pensamiento dispositivo del proceso señalando lo siguiente: “Si se intenta definir técnicamente la idea de *debido proceso* resulta más fácil sostener que es aquél que se adecúa plenamente a la idea lógica de proceso: dos sujetos que actúan como antagonistas en pie de *perfecta igualdad* ante una autoridad que es un *tercero* en la relación litigiosa (y, como tal, imparcial e independiente). En otras palabras: el *debido proceso* no es ni más ni menos que el *proceso* que respeta sus propios principios”.

Arturo Hoyos señala que “El principio de que en un sistema político debe haber un proceso justo es para pensadores de la

talla de John Rawls, profesor de la Universidad de Harvard, un requisito fundamental para que pueda existir un verdadero imperio del derecho (rule of law), y entiende que debido proceso es aquél razonablemente estructurado para averiguar la verdad, de formas consistentes con las otras finalidades del ordenamiento jurídico, en cuanto a determinar si se ha dado alguna violación legal y en qué circunstancias. (HOYOS, Arturo. El debido Proceso. Segunda reimpresión. Bogotá. Editorial Temis S.A. pp,4).

Víctor Ticona Postigo, al citar al profesor Juan Morales Godo señala que “Los principios que informan el debido proceso serían: a) juez natural, b) defensa en un proceso, c) duración del proceso, d) motivación de las resoluciones, e) pluralidad de la instancia”. (TICONA, Víctor. El debido proceso y la demanda civil. 1ra. Edición. Lima. Editorial Rodhas S.A. 1998.).

El Tribunal Constitucional en la sentencia número 5194-2005-PA/TC, ha señalado que el derecho al debido proceso comprende una serie de derechos fundamentales de orden procesal, cada uno de los cuales cuenta con un contenido constitucionalmente protegido que le es propio; y, en ese sentido, no tiene un ámbito constitucionalmente garantizado en forma autónoma, sino que su lesión se produce a consecuencia de la afectación de cualquiera de los derechos que lo comprenden.

Seguimos al profesor PRIORI, cuando señala que “se debe reconocer constitucionalmente tanto el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como un derecho a un debido proceso o procedimiento; sin que se tenga que tratar de mezclar ambos derechos, pues hacerlo significaría crear un artificio inconsistente en la medida que a la larga la confusión que se produce al intentar designar con un mismo nombre dos situaciones complejas distintas determina un gran peligro de que ninguno de esos dos derechos constitucionales tenga una efectiva vigencia”.

#### **2.2.4. EL TIEMPO EN EL DERECHO Y EN EL PROCESO**

##### **a. El decurso del tiempo en el derecho**

El jurista VIDAL RAMIREZ manifiesta que “el tiempo, o para mayor precisión su decurso, está indisolublemente vinculado a la existencia humana y, por ello, constituye el hecho jurídico de mayor importancia, pues, además, todos los hechos jurídicos tienen lugar en el tiempo, y éste, su decurso; influye gravemente en las relaciones jurídicas. (Vidal RAMIREZ, Fernando: “La prescripción extintiva y caducidad”, 5ta. ed., agosto, 2006, GACETA JURÍDICA, p. 11.).

Seguidamente nos dice que “el decurso del tiempo como hecho jurídico tiene que ser considerado en su transcurso mismo, ya que es su devenir el que ejerce influencia

sobre las relaciones jurídicas. El fenómeno jurídico es el transcurso del tiempo, que es el que se recoge en la normativa jurídica para precisar sus efectos, máxime si todos los hechos jurídicos tienen lugar en el tiempo, o más precisamente, en el transcurrir del tiempo”, y citando al civilista Messineo, éste precisa que “no debe confundirse el tiempo como periodo o espacio, esto es, como intervalo entre dos momentos: a) con el término, que es un determinado momento o punto del tiempo (instante) en que un determinado efecto se produce (termino inicial), o se agota (termino final); b) ni con la fecha, entendida también ella como punto cronológico en el cual madura una incierta situación, o acaece un cierto hecho”.

**b. El tiempo en el proceso.**

Decía el insigne jurista de Udine, CARNELUTTI, que “el valor que el tiempo tiene en el proceso es inmenso y, en gran parte desconocido. No sería demasiado atrevido paragonar el tiempo a un enemigo con el cual el Juez lucha sin descanso. Por lo demás, también bajo este aspecto, el proceso es vida.

Las exigencias que se plantean al Juez en el orden al tiempo, son tres: detenerlo, retroceder o acelerar su curso”. Por su parte CHIOVENDA decía que el juicio, como medio de conseguir el ejercicio del derecho, no

puede conducir sino a la declaración de éste en su mayor y posible integridad; el derecho debe reconocerse como si lo fuese en el momento de interponerse la demanda.

Debemos recordar que por sobre todas las cosas el proceso es un instrumento del derecho material, por lo que sólo es un medio para obtener un fin, esto es, la satisfacción de las situaciones jurídicas de desventaja.

“La principal imperfección del proceso expresa el profesor PRIORI POSADA es una que está en su esencia y de la cual el proceso jamás se podrá librar: el tiempo. El proceso toma tiempo, y muchas veces el tiempo es necesario para que el proceso pueda actuar sobre la situación jurídica material, se convierte en la peor amenaza y muchas veces en la más grave lesión que la situación jurídica material pueda sufrir”. (PRIORI POSADA, Giovanni: “La Tutela Cautelar. Su configuración como Derecho Fundamental”, ARA EDITORES, 2006, p. 24.).

Como apunta PRIORI, el proceso se encuentra frente a un gran “dilema”, el mismo que en palabras de MONROY PALACIOS, consiste en que “(...) mientras el incumplimiento por parte de un sujeto de la norma primaria es inmediato, la eficacia sustitutiva de la

jurisdicción es mediata, en tanto requiere el transcurso de cierto lapso dentro del cual es imprescindible realizar alguna clase especializada de actividad”. (MONROY GALVEZ, Juan y MONROY PALACIOS, Juan José: “Del mito del proceso ordinario a la tutela diferenciada. Apuntes iniciales”, en: Revista peruana de Derecho Procesal, N° IV, Jemafy Editores, Lima, 2001, p. 158.)

El ya citado jurista de Udine argumentaba: “La duración del proceso es uno de sus defectos humanos, que aun cuando quepa perfeccionar la regulación del mismo, no podrán ser jamás eliminado del todo”. (CARNELUTTI, Francesco: “Sistema de Derecho Procesal Civil”, t. I, UTEHA, Buenos Aires, 1944, p. 243.).

Es evidente, como señala PRIORI, que “el problema se agrava si somos conscientes que el tiempo que dura el proceso es algo que no depende exclusivamente del demandante, sino también del Juez y del demandado; pues cada uno de estos sujetos procesales requiere *su propio tiempo* para la actuación procesal. El tema es que muchas veces ese período de tiempo se extiende más allá de lo razonable. Las razones de ello son varias: la carga procesal, la falta de presupuesto, la carencia de infraestructura, pero muchas veces también, el abuso en el ejercicio del derecho de defensa por

parte del demandado, entre otras razones. La pregunta que cabe realizar entonces es ¿el demandante es el único que debe sufrir todos los perjuicios generados por la demora del proceso? La igualdad de las partes en el proceso y la necesidad de que la tutela jurisdiccional sea efectiva obligan a que las cargas que supone el tiempo del proceso deban ser distribuidas entre los litigantes, para así no hacer que una cuestión inherente al proceso (el tiempo) termine por perjudicar a sólo una de ellas”.

Siendo esto así, es obvio que todo tiene relación, ya que hablamos en esencia de la efectividad del proceso como instrumento del derecho; por lo tanto, estando ya dentro del proceso no se puede desligar cada uno de sus actos, formas y del tiempo que conlleva el mismo, todo esto es dinámico, secuencial y dialéctico, más no uniforme.

Cada proceso sienta una historia, algunas breves y otras extensas, tiene altos y bajos; en unos momentos es lineal, pero en otros es cóncavo y convexo. Todo esto convierte al proceso en lo que algunos denominan un juego de ajedrez, un drama o un teatro, pero no hay que olvidar que a través de él se están jugando los intereses subjetivos de personas, sus derechos están en disputa, por lo que existe riesgo de los mismos; siendo que el



tiempo que conlleva el mismo puede ser generoso como devastador, tiempo que es legal (plazos establecidos por el legislador), como, a pesar de esto, es innegable que los procesos toman tiempo más del normal, extendiéndose indebidamente, tornando muchas veces en utópico el derecho y en letra muerta la efectividad de la tutela.

Existe por parte del justiciable, así como de la sociedad en general “una expectativa de que dicho proceso culmine en un lapso razonable de acuerdo con su naturaleza, el amparo frente a eventuales frustraciones de dichos principios (se refiere al debido proceso) no debería desnaturalizarse al extremo de que llegara a convertirse en *un instrumento conminatorio* sobre el órgano judicial, introduciendo límites inadmisibles a la prudente y adecuada reflexión que debe preceder a cualquier decisión”.

En consecuencia, es claro que no sujetándose un proceso a un tiempo razonable se vulnera el derecho a un debido proceso y en mayor grado la efectividad de la tutela judicial, lo que determina la insatisfacción en los justiciables, así como la desestabilización del orden jurídico y del Estado Constitucional de Derecho, ya que el mejor instrumento que ha creado el hombre y que posee

el Estado para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos no sirve, es ineficaz.

Pues si el proceso no es capaz de otorgar aquello que es pretendido y respaldado por el derecho sustancial, simplemente, no debe existir; porque es injusto, es inoportuno, ya de nada vale así. Contra esto deben luchar cada día el Estado, el juez, el justiciable y todos nosotros; tratando de buscar que el proceso sea efectivo, garantista y cumplidor de lo que el ordenamiento jurídico promete.

#### **2.2.5. EL ACTO JURÍDICO PROCESAL**

Sobre el concepto jurídico de “acto procesal” existe abundante doctrina, la misma que, salvo aisladas concepciones, lo considera como una derivación o especie del acto jurídico sustancial; se cita el siguiente concepto: “Por acto procesal se entiende el acto jurídico emanado de las partes, de los agentes de la jurisdicción o aun de los terceros ligados al proceso, susceptible de crear, modificar o extinguir efectos procesales. (COUTURE, Eduardo; “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, 3era. ed., 14ava. reimpresión, 1988, Ediciones DEPALMA, Buenos Aires – Argentina, p. 201.), al respecto el padre de la ciencia procesal, CHIOVENDA, refería lo siguiente, “Llámanse actos jurídicos procesales los que tienen importancia jurídica respecto de la relación procesal, o sea

los actos que tienen por consecuencia inmediata la constitución, conservación, desarrollo, modificación o definición de la relación procesal, esto es: a) actos de parte; b) actos de los órganos jurisdiccionales”. (GIUSEPPE CHIOVENDA cit. por MONROY CABRA, Marco: “Principios de derecho procesal civil”, 3ra.ed., 1988, TEMIS S.A., p. 243.)

Asimismo, MONROY GALVEZ, nos da algunos alcances, precisando que los actos procesales son actos públicos, formales, unilaterales, que carecen de autonomía desde la perspectiva de su eficacia (son actos concatenados, dinámicos, dialécticos y se encuentran ligados a la obtención del fin de proceso) y producen una relación jurídica dinámica; y citando Al germano SCHONKE, el maestro peruano manifiesta que “Los actos procesales se rigen para todos sus requisitos, formas, finalidad, contenido y efectos, solamente por el derecho procesal y no por el derecho material (...)”.

#### **2.2.6. EL PLAZO Y EL TÉRMINO PROCESAL**

Antes que pasemos a establecer la categoría concerniente a los plazos procesales (que lo hacemos por didáctica y a la vez para que nos ayude en adelante a aclarar el panorama de la presente investigación), debemos señalar con antelación que no es lo mismo la duración del proceso, y por ende lo que éste demora para terminar con plazos procesales;

habiendo sí, es cierto, una relación, porque de todas maneras ya los plazos procesales conllevan una duración, pero ésta es legal, en consecuencia, natural del mismo. No obstante ello, la duración del proceso va mucho más allá, en la realidad es notable y *sub oculis omnium* que un proceso no dura el plazo que ha establecido el legislador, sino que se extiende extemporáneamente, dependiendo de diversos motivos complejos; entre ellos la carga procesal, la complejidad del caso en concreto, la imprudencia del juez, el abuso y la temeridad de las partes, etc.

**a) El plazo procesal.**

Como lo recalca el profesor VIDAL RAMIREZ, acerca de que la idea del plazo está indeliblemente vinculada al decurso del tiempo o tiempo móvil, por lo que la primera prescripción legal sobre el plazo lo tenemos en el artículo 183 de nuestro Código Civil, el cual somete sus reglas al Calendario Gregoriano y las hace extensivas a todos los plazos.

Es preciso acotar que los actos procesales están sujetos a determinadas formas como el tiempo, lugar y modo; siendo que para los efectos de este acápite interesa el “tiempo”, el mismo que tiene fundamental trascendencia en el derecho procesal.

Específicamente para el proceso, el plazo, citando al jurista CARRION LUGO, es “el lapso de tiempo dentro del cual se pueden realizar determinados actos procesales”.

En el derecho procesal debe tenerse en cuenta que los actos procesales se realizan en el tiempo y en el espacio, “La eficacia del acto procesal depende de que sea ejecutado en tiempo oportuno, y de allí que la ley establece los días y hora hábiles en que tales actos deben efectuarse”.

#### **b) El término en el proceso**

Siguiendo a CARRION LUGO, “es la fecha fija señalada para la realización de un acto procesal, como cuando se señala fecha para la audiencia de pruebas”. Para ALSINA el “término es el espacio de tiempo dentro del cual debe ejecutarse un acto procesal”.

Siguiendo al colombiano MONROY CABRA, el fin de los términos es hacer efectiva la preclusión de las distintas etapas del proceso. Asimismo se ha dicho que la función de los términos estriba en que constituye una garantía más para lograr el debido proceso, la debida defensa y principalmente la igualdad de las partes en el contradictorio.

#### **c) Marco normativo**

Nuestro Código Procesal Civil en la Sección Tercera, Título III, artículos 141 al 147 regula sobre el tiempo en los actos procesales, es decir lo referente al plazo, el término y todo lo relacionado con ello, no obstante, cabe precisar que en el ordenamiento sustantivo también existen normas dispersas pertinentes al plazo, así como también en el mismo Código adjetivo están dispersas una gran porción de normas que tipifican plazos en sus distintas formas.

Rescatamos como una norma fundamental de nuestro ordenamiento procesal sobre lo que se viene reseñando, en el sentido de que de ella derivarán una serie de consecuencias jurídico procesales para las partes y para la actividad jurisdiccional, así como también que contiene intrínsecamente el principio de preclusión, la contenida en el artículo 146 del CPC., que prescribe: “Los plazos previstos en este Código son perentorios. No pueden ser prorrogados por las partes con relación a determinados actos procesales. La misma regla se aplica al plazo judicial. A falta de plazo legal, lo fija el Juez”.

Esta norma está anticipada y respaldada por la que está prevista en el cuarto párrafo del artículo V del Título Preliminar del CPC., que señala “La actividad procesal se realiza diligentemente y dentro de los plazos

establecidos, debiendo el Juez, a través de los auxiliares bajo su dirección, tomar las medidas necesarias para lograr una pronta y eficaz solución del conflicto de intereses o incertidumbre jurídica”.

Esta norma conlleva el principio procedimental de celeridad, del cual se hablará posteriormente. Es necesario recalcar además, que las normas procesales son de carácter imperativo (Art. IX del T.P. del CPC.), es decir de orden público, ya que el derecho procesal es de naturaleza pública, dado que sus normas están ligadas al fin del proceso; paz social en justicia, ergo, un fin público, de interés del Estado y la sociedad.

#### **d) Clases de plazo.**

##### **a) Plazo fatal o perentorio.**

Una definición contundente y precisando casi todos sus alcances sobre este tipo de plazo procesal es el del gran maestro brasileño, ALVARO DE OLIVEIRA, diciendo que el plazo perentorio “es el rasgo evidente de la característica inevitablemente cronológica del proceso, tormento y pesadilla de los abogados. Se trata de una fatalidad, imposible por tanto de ser dejada de lado, bajo pena de que se eternicen los litigios, que sirve, además, para que el proceso se ordene. Se impone, sin embargo, que

sean fijados por la ley, en una medida razonable y en lo posible de manera uniforme, en consonancia con las dificultades del acto procesal correspondiente, permitiendo sólo en casos excepcionales la intervención del juez” (ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos A.: “Del formalismo en el proceso civil (Propuesta de un formalismo-valorativo)”, trad. por MONROY PALACIOS, Juan, 1era. ed., 2007, Palestra Editores, p. 362.

**b) Plazo dilatorio.**

Es aquel plazo prorrogable con respecto a la duración normal o mínima, (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales”, 25ava.ed., Editorial Heliasta, p. 760.) que extiende o amplía el decurso normal de un plazo fijado legal, judicial o convencionalmente.

**c) Plazo Legal.**

Es aquel que está fijado en la ley, reglamento, u otra disposición general. Se contrapone al plazo convencional y al judicial; por ejemplo, el plazo de 30 días para contestar la demanda en el proceso de conocimiento, luego de ser emplazada con la misma.

**d) Plazo judicial.**



Es el que un juez o tribunal señala de acuerdo con facultades de las leyes procesales. Por ejemplo, el plazo que prorroga la fecha para una audiencia.

**e) Plazo convencional.**

Es el fijado de mutuo acuerdo por las partes

**f) Plazo Razonable**

La doctrina procesal y la constitucional, así como la jurisprudencia tanto en sede nacional como internacional, vienen hace algunos años pronunciándose sobre el contenido del derecho a un debido proceso, y dentro del mismo el derecho a obtener una sentencia en un plazo razonable.

Cuando un justiciable acude a través del derecho de acción ante un tribunal para que se hagan efectivos sus derechos materiales; obviamente, además de tener la expectativa de obtener un fallo favorable, también tiene la expectativa de obtener una sentencia dentro de un tiempo o plazo razonable, normal, común, ordinario; es decir, que no sea tan extenso o tan dilatado como para terminar creyendo que sus derechos y el proceso son una burla más o juego sin fin.

Esto parece utópico, pero ha ocurrido a lo largo de la historia de los juicios, justamente, el Poder Judicial no ha brindado pruebas de credibilidad, mucho menos de rapidez y efectividad, mucha gente prefiere componer su conflicto jurídico privadamente, otros incluso dejar las cosas tal como están, prefieren perder sus derechos (créditos, propiedades, salud, indemnizaciones, etc.) por el solo hecho de no verse envueltos en un “laberinto”.

Nuestra realidad está de más mencionarla, la demora o dilación procesal es ya normal, es un estereotipo cuasi innato de la justicia, que incluso, jocosamente la voz popular ha dicho que “la justicia es ciega y como tal, pues demora, ya que no sabe dónde anda”.

Para los efectos de este trabajo, es necesario conocer ¿Qué es un plazo razonable?

¿Cuánto debe durar un proceso judicial para que se considere que se ha sustanciado en un plazo razonable?

En primer lugar, lo “razonable”, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa “Arreglado, justo, conforme a razón. Mediano, regular, suficiente en calidad o en cantidad”. En consecuencia, para

efectos de esta investigación, “plazo razonable” será un plazo justo, equitativo, regular y suficiente en cantidad.

#### **2.2.7. EL DERECHO A OBTENER UNA SENTENCIA EN UN PLAZO RAZONABLE**

Actualmente, en el ámbito internacional, ya se está considerando como un derecho del justiciable el de obtener una sentencia en un plazo razonable, pues Joan PICO I JUNOY lo define “como aquél referido “no a la posibilidad de acceso a la jurisdicción o a la obtención práctica de una respuesta jurídica a las pretensiones formuladas sino a una razonable duración temporal del procedimiento necesario para resolver y ejecutar lo resuelto”. (PICO I JUNOY, Joan cit. por COAQUILA VALDIVIA, Jaime: “Derecho al proceso en un plazo razonable”.

Asimismo, “el derecho al proceso en un plazo razonable tiene una doble naturaleza jurídica, ya que por una parte comprende una FACETA PRESTACIONAL consistente en el derecho a que los jueces resuelvan en un plazo razonable, y de otra parte una FACETA REACCIONAL que implica la inmediata conclusión de los procesos en los que se incurra en dilaciones indebidas”.

Esta disgresión ha sido también explicada por el Tribunal Constitucional Español a propósito de la sentencia STCE

302/2002 recaída en un Recurso de Amparo del 11 de diciembre del 2002 de la siguiente manera:

“Juntamente con la autonomía del derecho fundamental en cuestión, a la que se ha hecho referencia, se ha destacado su doble faceta prestacional y reaccional. La primera, cuya relevancia fue resaltada en la STC 35/1994 del 31 de enero (fj. 2), consiste en el derecho a que los órganos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable y supone que los ‘jueces y tribunales deben cumplir su función jurisdiccional de garantizar la libertad, la justicia y la seguridad con la rapidez que permita la duración normal de los procesos evitando dilaciones indebidas que quebranten la efectividad de la tutela (...) A su vez la faceta reaccional actúa en el marco estricto del proceso y se traduce en el derecho a que se ordene la inmediata conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones indebidas”.

Esta sentencia no sólo se limita al ámbito constitucional, sino también al civil, penal, laboral, administrativo, etc.

En el ámbito supranacional el derecho al proceso en el plazo razonable ha sido contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos “*Pacto de San José de Costa Rica*” en los siguientes términos:

*“Art. 8.1.-Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o cualquier otro carácter.”*

Por su parte el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de forma muy similar a la Convención Americana ha contemplado el mismo derecho en los siguientes artículos:

*“Art. 6.1 Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por ley (...)”.*

Estas son sólo algunas de las normas internacionales más relevantes sobre el tema, o sin embargo no son las únicas, ya que los Estados siempre han tratado de efectivizar el derecho a la tutela jurisdiccional así como el debido proceso, de tal manera que han impuesto normas que traten de hacer realidad tal justicia y prueba de ello son las normas citadas.

- **CRITERIOS ESTABLECIDOS POR LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA PARA DETERMINAR EL PLAZO RAZONABLE DE UN PROCESO.**

La duración razonable del trámite, entonces, se entenderá tal luego de confrontar el efectivo cumplimiento de los plazos procesales con otras circunstancias; por ejemplo, con la complejidad del litigio, los márgenes ordinarios de duración según las circunstancias específicas de cada controversia, la conducta procesal del litigante y la de sus letrados, la de las autoridades incluyendo la actividad del juez, la acumulación de trabajo, la consideración de los medios disponibles, etc”.

La Corte Europea de Derechos Humanos ha prefigurado a través de su jurisprudencia algunos parámetros importantes, que han sido posteriormente asumidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la determinación de la razonabilidad del plazo en los procesos. Así en el CASO DEUMELAND la Corte Europea de Derechos Humanos estableció como criterios relevantes de determinación del plazo razonable:

- a) La complejidad del asunto;
- b) La actividad procesal del interesado y;
- c) La conducta de las autoridades judiciales

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido igualmente la doctrina elaborada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal

Constitucional Español, cuando en el emblemático CASO GENIE LACAYO en sentencia del 29 de enero de 1997 ha descrito el plazo razonable de la siguiente forma:

“Este no es un concepto de sencilla definición. Se pueden invocar para precisarlo los elementos que ha señalado la Corte Europea de Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se analizó este concepto, pues este artículo de la Convención Americana es equivalente en lo esencial, al 6 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto b) la actividad procesal del interesado c) la conducta de las autoridades judiciales”

COAGUILA señala que existen otros factores para determinar los criterios de razonabilidad del plazo, también que existen atenuantes de la dilación, así el mencionado autor establece que “otros factores importantes consisten en “las circunstancias del caso concreto”, “la materia debatida”, “la situación laboral” o “la salud del denunciante”; y del otro lado como causales atenuantes de la dilación se encuentran “el exceso de trabajo del órgano

jurisdiccional”, “la defectuosa organización, personal y materiales de los Tribunales”.

También aprovechamos la ocasión para recalcar la diferencia entre plazo razonable y plazo legal, “El derecho al proceso en un plazo razonable no se identifica con el derecho al plazo determinado por ley, en atención a que mientras el primero depende de los criterios asumidos para fijar el contenido del “*plazo razonable*” en el caso del segundo no cabe duda alguna sobre el alcance del “*plazo legal*”. Y es que no todo incumplimiento del “*plazo legal*” puede significar un atentado contra el “*plazo*” *razonable*”, puesto que existen “*dilaciones justificadas*” y “*dilaciones indebidas*”

Esta diferencia ha sido muy bien explicada por el Tribunal Constitucional Español en la citada sentencia del STCE 0195/1997 del 11 de noviembre de 1997:

“el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no ha constitucionalizado el derecho a los plazos marcados por las leyes, sino el derecho a que el proceso sea resuelto dentro de un tiempo razonable”.

**En el Perú**, pese a que la demora de los procesos judiciales es un mal generalizado; no contamos con abundante jurisprudencia al respecto que nos ayude a mejorar la Administración de Justicia, y que nos oriente en criterios



sobre la razonabilidad del plazo en los procesos y a brindar tutela garantista de los derechos de los justiciables; menos aún si se trata de procesos civiles, ya que la mayor parte de jurisprudencia existente está referida a los procesos penales.

A continuación, señalamos algunos casos en los que nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto; el primero que citamos se trata de un Hábeas Corpus donde el peligro está en la libertad del individuo.

Así, en el EXP. N°04144-2011-PHC/TC, en este caso, el Tribunal Constitucional ha citado numerosas normas internacionales que vinculan al Perú, así como casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se ha precisado el contenido del derecho a ser juzgado en un plazo razonable sin dilaciones indebidas, así como de las precisiones que se han hecho para determinar cuándo un caso incurre en exceso de plazo, y éste perjudica el derecho del justiciable. Siendo que en este caso el TC. falla declarando fundada la demanda, por haberse acreditado la vulneración del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable; en los votos singulares los magistrados concuerdan en que se ha vulnerado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable argumento sus puntos de vista, siendo

las discrepancias en otros aspectos que no viene al caso mencionar.

Asimismo, en otras sentencias el Tribunal Constitucional, ha asociado el plazo razonable con el plazo legal, ejemplo de esto son los Expedientes N° 1093-2000- HC/TC del 30 de noviembre de 2000, N° 0702-2000-HC/TC del 19 de enero de 2001, N° 1157-1999-HC/TC del 19 de abril de 2002 y el N° 876-2000-HC/TC del 18 de enero de 2001.

Este mismo criterio legalista parece compartirlo la Corte Suprema cuando en la Casación N° 1312-2000/LIMA ha señalado que “El debido proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales, a través de un procedimiento legal, en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir prueba y de obtener una sentencia que decida la causa adentro del plazo preestablecido en la Ley Procesal”.

Un mejor ejemplo es el CASO CINCO PENSIONISTAS VS. PERÚ, donde un grupo de jubilados de la Superintendencia de Banca y Seguros beneficiarios de la Ley 20530 demandaron al Estado peruano mediante Acción de Amparo, con la finalidad de lograr el pago de sus pensiones en la

misma proporción que los titulares en actividad de sus institución de origen; en atención a que su régimen pensionario contemplaba la nivelación automática de sus pensiones de cesantía (cédula viva).

En este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre la materia en la sentencia de fecha 28 de febrero de 2003, en la que sostiene: “No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el poder Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial”.

En este caso existe una clara demostración de una “dilación indebida” no en la expedición de la sentencia sino en su ejecución y plena efectivización; por lo que aquí toma vital importancia la disquisición antes citada en cuanto a que, a la parte accionante se le otorga tutela jurisdiccional efectiva,-

propiamente dicha, cuando la resolución es ejecutada plenamente.

#### **2.2.8. LA DILACIÓN INDEBIDA DEL PROCESO**

Inicialmente, conviene precisar qué es un proceso sin dilaciones, para lo cual citamos a la doctora MARIANA ARDILA, quien a su vez cita una sentencia del Tribunal Constitucional colombiano e indica que “el proceso sin dilaciones indebidas es aquel en el que el trámite se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro de los plazos perentorios fijados por el legislador y en el que los intereses litigiosos reciben pronta satisfacción. (Corte Constitucional. Sentencia T-030-05, cit. por ARDILA TRUJILLO, Mariana: “La prohibición de dilaciones injustificadas en la jurisprudencia constitucional”, en: Revista Derecho del Estado, N°. 23, diciembre, 2009, p. 80.)

La profesora antes citada señala que “la dilación se puede definir como el incumplimiento de un término en un proceso judicial. Es decir, el parámetro usado por la jurisprudencia constitucional para verificar si existe una dilación [...], es el término que ha previsto la ley o el juez para la actuación que se estima”. Líneas adelante la doctora señala que “una dilación en un proceso judicial existe cuando se ha superado el término judicial o legal para el desarrollo de la actividad en cuestión, o cuando, no habiendo término, se ha sobrepasado

el plazo razonablemente necesario para arribar a los fines de la etapa procesal.

En consecuencia, para determinar la existencia de una dilación en un proceso judicial debe emplearse como parámetros los plazos o términos legales o judiciales, pero surge la duda de cuál sería el criterio en caso de no existir tales términos. En estos casos el término deberá ser el razonable según los fines de la etapa procesal y la complejidad de la actuación para el logro de dichos fines, así como la materia controvertida, la conducta de las autoridades judiciales y de las partes (específicamente abogados).

Ahora, se precisará cuándo una dilación del proceso es justificada, para luego escindir aquéllas en las que no se justifica su dilación, mejor dicho incurren en dilación indebida, en tal sentido siguiendo el concepto de MARIANA ARDILA, que una vez más cita al Tribunal Constitucional Colombiano: “la dilación es justificada cuando, a pesar del cumplimiento cabal de los deberes por parte del juez y de su diligencia, resulta imposible objetivamente el cumplimiento del término judicial en cuestión. Siempre que estos supuestos estén debidamente probados en el proceso de tutela, se presentará una dilación justificada [...]”.

Considerando los conceptos antedichos, pues existirá dilación o mora en el proceso cuando el incumplimiento de los órganos jurisdiccionales respecto a sus deberes o a su falta de diligencia, así como por la actividad o inactividad de las partes y la carga procesal obstruya el curso normal o razonable de un caso en sede judicial.

En relación a la carga procesal, Wilson Hernández Breña, señala que, “Es justo mencionar que en el desenvolvimiento de la carga procesal también interactúan otro tipo de factores de corte netamente cualitativo. Así en el campo del factor humano, tenemos la capacidad profesional y ética de los jueces y del personal administrativo” (HERNÁNDEZ, Hugo. Indicadores sobre administración de Justicia: Mapa Judicial, presupuesto y eficiencia en el desempeño judicial. Justicia Viva, Lima.2003. pp.71)

Para dicho autor, la capacidad profesional y ética de los jueces y del personal administrativo, coadyuvan al desenvolvimiento de la carga procesal; esto quiere decir que dependiendo del desempeño de dichas personas, la carga procesal podrá ser manejada, al punto de no desbordarse.

El desempeño funcional de los operadores del derecho tiene directa incidencia en que un proceso judicial sea tramitado en forma adecuada, lo cual va a permitir que el proceso culmine sin demasiada dilación.

Resulta cotidiano escuchar a gran número de litigantes y abogados comentar en los pasillos de las sedes judiciales las demoras que se producen al interior de los procesos judiciales que giran en trámite en los distintos órganos jurisdiccionales, lo cual es aceptado muchas veces por ellos mismos con cierta resignación.

Pero también es común oír a los Magistrados y auxiliares jurisdiccionales de que una buena parte de esta responsabilidad la tienen los abogados, ya que por cualquier cosa utilizan la famosa “nulidad”, los no menos conocidos “recursos”, entre otros, con la sola finalidad de dilatar el proceso y la agonía de los justiciables, pese a que muchas veces tales actos procesales no solucionen nada, por el contrario, entorpecen el proceso.

#### **2.2.9. LOS DERECHOS QUE SE CONTRAVIENEN CON LA DILACION DEL PROCESO.**

Conforme ya se ha venido precisando, pues todo tiene relación en el proceso, los caminos que vamos siguiendo encuentran aquí una confluencia, un punto de unión. Es aquí donde se muestra nítidamente la vulneración del plazo razonable, aquella extemporaneidad en la que incurre el proceso en grave afectación de los derechos de los justiciables, lo que se dejará sentado son los derechos que se infringen, que obviamente hasta ahora ya son notorios.

Estando a lo dicho, es que ya no necesitamos hacer teoría ni definiciones de los derechos que mencionaremos, puesto que ya se hicieron en acápites anteriores, por lo que a ellos nos remitimos para los efectos.

Estando así las cosas, los derechos o mejor dicho garantías que se infringen cada vez que un proceso incurre en dilaciones indebidas son en principio los de la “*tutela jurisdiccional efectiva*” y el “*debido proceso*”; son estas garantías fundamentales de todo ciudadano, y más aún de quien acude en busca de justicia las que se ven afectadas cuando el proceso no cumple su cometido debido a los excesos de tiempo que lo tornan inútil.

Está de por medio la efectividad del proceso como garantía del Estado Constitucional de Derecho, por lo que sería un contrasentido que el proceso que está elaborado para tutelar los derechos materiales termine por acabar con ellos. El tiempo que demora un proceso en nuestro país es demasiado, prueba de ello es el amparo; responsables de estos son varios (Estado, juez, partes, abogados, etc.); sin embargo, creemos que la irresponsabilidad de quien fuera debe ser sancionada; pues las garantías del ciudadano están en juego y puede devenir en una desestabilización del orden jurídico, lo que no conviene a nadie, pues ya mucho se ha luchado contra esto.



El tiempo que tome el proceso debe ser el necesario y racional de acuerdo a variados factores, con tal que éste sea efectivo y las personas, en la realidad, obtengan los chiovendianos *bienes de la vida* por los que iniciaron su proceso, éste debe devolverles lo que les fue arrebatado, debe realizar los derechos subjetivos, debe concretizar la abstracción de la norma, de esta manera el derecho y en especial el proceso cumple su cometido, resolver el conflicto, y la paz social, así como garantizar en última instancia nuestro Estado Democrático y Constitucional de Derecho.

#### **2.2.10. PROCESO DE CONOCIMIENTO - VÍA PROCEDIMENTAL EN LA QUE SE TRAMITAN LOS PROCESOS DE DIVORCIO POR CAUSAL**

Sobre el proceso de conocimiento ha dicho Hinostroza Mínguez: “[...] es aquel proceso contencioso que se caracteriza por la mayor amplitud de los plazos de las respectivas actuaciones procesales (en relación con las demás clases de procesos) y, también, porque a través de él se ventilan, por lo general, pretensiones que resultan ser sumamente complejas o de gran estimación patrimonial o que versan sobre derechos de gran trascendencia que ameritan un examen mucho más profundo y esmerado por parte del órgano jurisdiccional. (HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto: “Manual de consulta

rápida del proceso civil”, 2001, Lima, 1era. edición, Gaceta Jurídica, p. 377.)

Pero, eso no es todo, pues otra función importante, trascendental, le está asignada al proceso de conocimiento: el de ser “informador” de los otros procesos que prevé nuestro ordenamiento procesal civil. Es decir, este es el proceso prototipo, el que contempla todas y cada una de las etapas por las que puede discurrir una controversia de naturaleza civil, así como todas las figuras que en ella pueden emplearse y por tal motivo se convierte en modelo de los procedimientos menores. Es más, su carácter informador (o, si se quiere, *supletorio*) puede trasponer el ámbito procesal civil y llegar a otras áreas donde también se resuelven conflictos, incluso al ámbito penal (así lo establece la ley de la materia).

Por eso Idrogo Delgado puntualiza: “El proceso de conocimiento es el conjunto de actos procesales coordinados, sistematizados y lógicos que orientan a los procesos contenciosos (abreviado, sumarísimo, cautelar y de ejecución) y no contenciosos de materia civil y por analogía, a falta de norma expresa, a otros procesos ya sean administrativos, laborales, y otros que se creen por la ciencia procesal” (IDROGO DELGADO, Teófilo: “Derecho procesal civil”, tomo I (Proceso de conocimiento)”, 2002, Lima, 1era. ed., edit. Marsol Perú Editores, p. 110).

## COMPETENCIA

Debido a su envergadura su tramitación ha sido encargado al Juez especializado Civil (o Mixto, en aplicación del artículo 46 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) y no al de Paz Letrado, que es de menor rango. (ALZAMORA VALDEZ, Mario: “Derecho procesal civil: Teoría general del proceso”, Lima, s/a., edit. EDDILI, 8ava ed., pp. 99-100).

Tal es lo establecido en la parte primera del Artículo 475 del Código Procesal Civil. Cabe precisar que como tal tiene la probabilidad de trasponer las dos instancias que están previstas para todo proceso (*Principio de Doble Instancia*) y llegar hasta *casación*, suerte ésta que no tienen todos los procesos civiles.

En los lugares donde exista Juez especializado de Familia, éstos (y ya no los jueces civiles) van a conocer de los asuntos que versan sobre Derecho de Familia y que corresponde tramitarse en la vía de conocimiento; ello de conformidad con lo establecido por el artículo 53 de la LOPJ.

El término *proceso* como lo esclarece Devis Echandía (DEVIS ECHANDIA, Hernando: “Teoría general del proceso”, Buenos Aires – Argentina, 1997, 3era. ed. revisada y corregida, Edit. Universidad, p. 154.), significa *conjunto o serie de actos concatenados y armoniosos*, ello quiere decir que en él se

dan secuencias, pasos, estadios, momentos, etapas, etc., cada uno de los cuales representan un avance respecto del anterior.

El Derecho Procesal de modo genérico contempla un proceso segmentado en etapas, respecto de lo cual resalta Monroy Gálvez que se trata de un tema de gran utilidad, diferentes y bien marcadas (postulatoria, probatoria, etc.), el cual va a variar en atención a múltiples circunstancias dando lugar a las vías procedimentales.

En efecto, señala el referido autor que, “si bien los procedimientos son distintos en atención a la pretensión para la que han sido creados, de una u otra manera todos se articulan en etapas surgidas del concepto unívoco que tiene el proceso como conjunto dialéctico de actos procesales realizados por los elementos activos de la relación procesal con un propósito común, acabar con el conflicto o la incertidumbre jurídica. Lo expresado no descarta el hecho que hay procedimientos en los que alguna de estas etapas están incluidas dentro de otras o colocadas en un lugar distinto”. (MONROY GALVEZ, Juan: “Formación del proceso civil peruano (escritos reunidos)”, Lima, mayo, 2003, edit. Comunidad, pp.188-189.).

#### **a) Postulatoria**

La postulación del proceso, entonces, es una de las etapas del proceso, en la cual las partes van a poder exponer sus posiciones (pedidos, en concreto) y van a poder rebatirlas una a la otra ante el Juzgador (demanda, contestación, reconvención, absoluciones, ofrecimiento de medios probatorios extemporáneos), así como van a poder cuestionar la relación procesal establecida (excepciones y defensas previas) o cuestionar algún medio probatorio que se haya ofrecido al proceso (tachas y oposiciones).

Monroy Gálvez, resume así este tema: “Todo proceso tiene al inicio una etapa en la que se plantean las pretensiones y las defensas; de alguna manera lo que se discuta y resuelva en el proceso está intrínsecamente ligado a aquello que se admita como pretensión o como defensa. Esta etapa limitativa del universo que va a discutirse y resolverse en el proceso, recibe el nombre de postulatoria”.

Significa pues, que en esta etapa, salvo pocas excepciones previstas en la ley, se va a recaudar todos los puntos de vista de las partes relacionados con la pretensión o pretensiones que se discuten en el proceso. Es la oportunidad que tienen las partes de hacer ver al juzgador sus razones por las cuales, generalmente, le piden que resuelva a su favor. Pero no solo eso, pues como bien se

advierde, también aquí se va a exigir preliminarmente el cumplimiento de los requisitos para una relación procesal válida, lo cual va a ser tarea del juez, ese juez director del proceso que ha plasmado a cada momento nuestro ordenamiento procesal.

Finalmente, resaltando la importancia del tópico en nuestro ordenamiento procesal, el reconocido jurista citado señala - en otro estudio de la materia, que “debe resultar difícil encontrar en el nuevo Código Procesal Civil una institución más trascendente que la Postulación del proceso. De hecho no habrá en el Código vía procedimental alguna que, en su inicio no exija el tránsito por todo o parte de su cauce. En consecuencia, deviene en necesario describir en qué consiste este obligado estadio evolutivo del proceso y, sobre todo, qué debemos esperar de él como jueces, abogados, practicantes o justiciables”.

En esta etapa se encuentra entre otros actos, el emplazamiento de la demanda, y como señala el citado autor Juan Monroy Gálvez, en su libro “Introducción al Proceso Civil”, el emplazamiento es el acto procesal, a través del cual se pone en conocimiento del demandado el inicio de un proceso en su contra. Es un típico acto de notificación; sin embargo, tiene una considerable trascendencia en el proceso, habida cuenta de que es el

momento en que la relación jurídica procesal queda perfeccionada. Incluso, no debe olvidarse que el acto del emplazamiento es el que determina el inicio o la conclusión de muchos deberes o derechos para los sujetos en conflictos. Así, el emplazamiento determina la fijación definitiva de la competencia respecto del demandante, el inicio del cómputo del plazo desde el cual se incurre en mora cuando corresponda, la interrupción de la prescripción extintiva y otros efectos más que el derecho positivo respectivo le pueda interesar otorgarle.

#### **b) Probatoria**

Es manifestación principal de esta etapa (la segunda en el orden de secuencia considerado por la doctrina después de la postulación del proceso) la *Audiencia de pruebas*; sin embargo pretendiendo asumir un conocimiento más cabal de la misma, es preciso examinar algunos temas previos y vitales.

Esta audiencia, que es uno de los actos procesales más importantes del proceso de conocimiento y palmaria expresión de los principios de *Oralidad* e *Inmediación*, debe su nombre al hecho de que en ella van a *actuar* (realizarse, desarrollarse, es decir convertirse las *fuentes de prueba* en datos plasmados en un acta) los *medios probatorios* (tanto típicos como atípicos) que no revisten la

condición de *documental* (Vgr. la declaración de parte, la declaración testimonial, la pericia, la inspección judicial, la exhibicional, el reconocimiento, etc.), a fin de que queden debidamente procesados en texto de simple lectura, examen y valoración al momento de sentenciar.

La Audiencia de pruebas, como todos los actos procesales, se sujeta a una serie de formalidades, las cuales se hallan reguladas de modo específico en el CPC entre los artículos 202 a 211. Entre los aspectos más importantes allí establecidos contamos:

- Es dirigida personalmente por el Juez, bajo sanción de nulidad.
- Deben concurrir personalmente las partes del proceso, pudiendo ir acompañados de sus abogados.
- Si sólo concurre una parte, la audiencia se realizará con ella; si no concurren ambas partes, el Juez fijará nueva fecha para su realización; si volvieran a inasistir, el Juez declarará concluido el proceso.
- El secretario del Juzgado redactará un acta, la que será dictada por el Juez, la misma que al finalizar será suscrita por todos los intervinientes, debiendo dejarse constancia si alguno de ellos se negase a efectuarlo.
- Llegado el momento de la actuación de los medios probatorios, debe observarse lo establecido en el



artículo 208, norma ésta que establece un orden lógico de prelación entre ellos (v. gr. ubica en primer lugar a la *pericia* y la *inspección judicial*, dejando para el final a la *declaración de parte*).

- Concluida la actuación el Juez concederá la palabra a los abogados que la soliciten.
- Antes de finalizar la audiencia, el Juez debe comunicar a las partes que el proceso está “expedito para ser sentenciado”, precisando el plazo en que lo hará.

### **c) Decisoria**

Es esta la etapa que encarna de modo más plausible la labor del Juez, debido a que entre las facultades que se le han otorgado como representante del Estado para cumplir la *función jurisdiccional* de éste, está la de decidir la controversia. Sino recuérdese que uno de los elementos o poderes tradicionales de la *jurisdicción* es la *iudicio*, que implica el pronunciamiento del Juez sobre el asunto sometido a su conocimiento.

En efecto, la *iudicio* es entendida como la “potestad de sentenciar”, siendo por ello -a entender de Alzamora Valdez- el “elemento principalísimo de la jurisdicción, puesto que la sentencia decide el conflicto y le pone término”. A su vez Carrión Lugo la conceptúa como “la facultad que tiene el juez para dictar sentencia definitiva

revestida de la cosa juzgada”(CARRION LUGO, Jorge: “Tratado de derecho procesal civil”, tomo I, 2000, Lima, 1era. ed., edit. GRIJLEY, p. 79.), y Ticona Postigo apunta que constituye “la facultad de dictar sentencia, decidiendo la litis conforme a ley, y en caso de insuficiencia, oscuridad o silencio de esta, la interpreta o integra para aplicarla” (TICONA POSTIGO, Víctor: “Análisis y comentarios al Código Procesal Civil”, tomo I, 1998, Arequipa, 4ta. Ed., edit. SAN MARCOS, p. 72.).

Consideramos que esta etapa no sólo está dada por la *sentencia* misma, vista como producto, sino también por todo el momento de valoración que le precede. No formaría parte de esta etapa la figura procesal conocida como *Juzgamiento anticipado del proceso*, que es inmediatamente previa a la valoración y al juzgamiento mismo, sin embargo debido a su afinidad con éstas y al importante rol que cumple en los procesos en que resulta aplicable, debemos también analizarla para determinar su esencia.

#### **d) Impugnatoria**

La impugnación -expresa Morales Godo- es una categoría propia de los actos procesales. Es decir, vendría a ser una de las consecuencias jurídicas de los actos procesales, junto con la eficacia, la cosa juzgada, la ejecución, etc.

Aunque expresa el referido autor que la impugnación está basada en la disconformidad de alguna de las partes con cualquier resolución judicial, por nuestra parte creemos que ello resulta incompleto, pues las resoluciones sólo son uno de los tipos de actos procesales que pueden ser materia de impugnación.

Asimismo, se señala y con razón que los defectos de forma o de fondo podrán alegarse a través de la impugnación a efectos de lograr su reforma, su modificación, su integración, su aclaración o su sustitución. Por su parte Hinostroza nos dice que “la teoría general de la impugnación implica la fiscalización de la regularidad de los actos del proceso, sobre todo aquellos concernientes al órgano jurisdiccional, representados a través de las correspondientes resoluciones. Presupone el control de la actividad judicial encaminado a corregir los actos irregulares o inválidos derivados de ella”. Luego agrega: “La teoría general de la impugnación trata el fenómeno de la denuncia referida a la presencia de actos procesales imperfectos o ineficaces, así como el estudio de los medios y procedimientos que el derecho positivo prevé con el objeto de rectificar tales actos” (HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto: “Medios impugnatorios en el proceso

civil: Doctrina y jurisprudencia”, 2002, Lima, 2da. ed. revisada y actualizada, edit. Gaceta Jurídica, p. 13.)

Expresa categóricamente Morales Godo que “el fundamento de la impugnación reposa en el error, aun cuando el deseo o la aspiración a la justicia podemos considerarla inmersa en el tema” (el resaltado es nuestro). Para Hinostroza, en cambio, la impugnación reposa en el derecho vulnerado con el acto viciado.

Aunque aparentemente son diferentes, los tres aspectos resultan relevantes como fundamentos de la impugnación. Mejor dicho, no son excluyentes, sino más bien concomitantes. En efecto, eso explica el hecho de que se diga que “la impugnación representa la forma idónea de procurar (a través de la correspondiente revisión por el mismo o por otro órgano jurisdiccional) suprimir los vicios que afectan a los actos procesales a fin de lograr su corrección y restablecer su legalidad, eliminándose así el agravio inferido al impugnante”. Esto último, hace referencia a la reparación del derecho afectado que se busca, lo cual trae necesariamente consigo la presencia de la justicia.

Monroy Gálvez encuentra como fundamento filosófico de la impugnación el hecho de que la actividad de juzgar, aunque sea la expresión más elevada del espíritu humano, el acto

realizado por el hombre que más se acerca a lo divino, es sólo un acto humano, y por lo tanto pasible de error; y que, siendo así, se hace necesario e imprescindible que sea revisado por otros seres humanos.

#### **e) Ejecutoria**

Debe su nombre esta etapa precisamente a lo que en ella se busca conseguir: la ejecución, el cumplimiento, la realización de lo decidido por el juez, en suma lo que doctrinariamente –siempre y cuando sea oportuno y satisfactorio- se conoce como *eficiencia*.

La fase ejecutoria del proceso lleva ínsita la facultad jurisdiccional conocida teóricamente como *executio* (aquella que, como se ha precisado anteriormente, llegara a estructurarla Alsina en su propósito de tratar a la *jurisdicción*).

#### **MATERIAS QUE SE CONOCEN EN EL PROCESO DE CONOCIMIENTO**

A diferencia de lo que mayormente ocurre en el resto de procedimientos, en el caso del proceso de conocimiento, sólo se ha previsto como materias *típicas* a ser tramitada en esta vía la *separación de cuerpos y/o divorcio por causal* y la *Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta*. Las otras posibles materias están libradas a la labor de subsunción,

adecuación o encuadramiento que hagan los operadores jurídicos a la sombra de la norma *apertus* (Art. 475 del Código Procesal Civil).

## **LOS PLAZOS**

Los plazos que prescribe nuestro Código para este tipo de proceso están taxativamente prescritos en el art. 478° del CPC.

El acto postulatorio por antonomasia es la demanda, y con ella se inicia el proceso, la que debe ser calificada por el juez, quien mediante un auto la puede admitir a trámite, o bien declararla inadmisibile con oportunidad para ser subsanada o declararla improcedente de plano, de conformidad a lo previsto en el artículo 427 del Código Procesal Civil.

Los plazos de este proceso son los siguientes: Cinco (5) días para interponer tachas u oposiciones a los medios probatorios, contados desde la notificación de la resolución que los tienen por ofrecidos; Cinco (5) días para absolver las tachas u oposiciones; Diez (10) días para interponer excepciones o defensas previas, contados desde la notificación de la demanda o de la reconvención; Diez (10) días para absolver el traslado de las excepciones o defensas previas; Treinta (30) días para contestar la

demanda y reconvenir; Diez (10) días para ofrecer medios probatorios si en la contestación se invoca hechos no expuestos en la demanda o en la reconvención, conforme al Artículo 440; Treinta (30) días para absolver el traslado de la reconvención; Diez (10) días para subsanar los defectos advertidos en la relación procesal, conforme al Artículo 465; Cincuenta (50) días para la realización de la audiencia de pruebas, conforme al segundo párrafo del Artículo 471; Diez (10) días contados desde realizada la audiencia de pruebas, para la realización de las audiencias especial y complementaria, de ser el caso; Cincuenta (50) días para expedir sentencia, conforme al Artículo 211 y Diez (10) días para apelar la sentencia, conforme al Artículo 373.

Asimismo, en el artículo 479 del Código Adjetivo, se señala que para los casos previstos en el artículo 435, los plazos serán de 60 y 90 días respectivamente.

Computando los plazos antes mencionados, el curso normal o promedio de un proceso de conocimiento sin mayores incidencias o desvíos que causen demora en él, debería durar: aproximadamente entre 1 a 2 años; lo que en la realidad no sucede, ya que en la mayoría de esos casos se excede en demasía dicho plazo.

## **2.2. LA NULIDAD PROCESAL**

### **2.2.1.- INTRODUCCION**

El tema a tratar en este capítulo es uno de los más controversiales, peligrosos y de los más utilizados en el ámbito procesal; pero, también es uno de los más apasionantes para la doctrina, engorroso para las partes de un proceso, y a la vez sustento de un debido proceso, como también, en repetidas veces, generador de un indebido proceso.

Esta institución procesal deriva de la clásica figura romana de la nulidad del acto jurídico, con la diferencia que la nulidad procesal es un remedio (para algunos teóricos es un recurso) para atacar actos procesales viciados, es decir, que padecen de algún defecto que les impide conseguir la eficacia para la que están destinados dentro del proceso; mientras que la nulidad del acto jurídico es una categoría jurídica de derecho privado destinada a sancionar los actos o negocios jurídicos carentes de determinados elementos necesarios para su eficacia jurídica, esto es, que dicho negocio es inválido para las partes que lo celebran

Al respecto, el maestro COUTURE nos dice que “la teoría de la nulidad es de carácter general a todo el derecho y no particular a cada una de sus ramas”, sin embargo, agrega, “pero también [...] se comprende que una vez admitidas ciertas nociones que forman la base de toda concepción acerca de la



nulidad, las soluciones se desvían y se hacen específicas”; asimismo, la profesora ARRARTE ARISNABARRETA, precisa lo siguiente: “[...] resulta pertinente indicar que el instituto de la nulidad procesal tiene su origen en el Derecho Civil , por lo que en estricto, podemos afirmar que estamos ante una institución prestada, pero que intenta abrirse paso, como una institución autónoma, con naturaleza y efectos, propios, proyectada a una nueva ciencia cuyo objeto de estudio es el proceso”.

ALVARADO VELLOSO manifiesta lo siguiente: “Al tener vida y eficacia sólo *dentro del proceso*, el acto procedimental se diferencia del acto jurídico en general, ya que no produce efectos externos y su única finalidad es posibilitar la emisión de la sentencia que ha de heterocomponer el litigio”.

Lo anterior nos permite colegir, en primer lugar, que la teoría procesal para determinar los conceptos, clases, principios, etc. de los actos procesales ha bebido de la fuente del acto jurídico, por consiguiente, lo mismo ha ocurrido respecto a las nulidades; no obstante ello, a pesar de las similitudes generales, existen diferencias específicas, ya que tanto el acto procesal como la nulidad del mismo gozan de cierta autonomía, o al menos eso han tratado de brindarle los procesalistas dedicados a las profundizaciones sobre esta institución, pero como se infiere de la referencia a COUTURE, las nulidades, independientemente de la rama a la que corresponda el acto

nulo, pertenecen a la teoría general de la nulidad que les es aplicable a todas.

Esto significa que en el campo estrictamente procesal la nulidad tiene su concepto, sus clases, sus elementos, sus causas, sus principios, su procedimiento, sus efectos, los cuales lo diferenciarán de la teoría de la nulidad, o mejor dicho, de la nulidad civil o privada.

### **2.2.2.- FORMA EN LOS ACTOS PROCESALES**

Es de vital importancia para comprender el instituto de las nulidades en el proceso, previamente conocer qué se entiende por formas o formalidad de los actos procesales (en el capítulo anterior ya se ha estudiado lo referente al acto procesal), toda vez que un procedimiento está conformado por actos o actividades concatenadas y preclusivas, las cuales requieren de determinados requisitos legales que influirán en la validez de dichos actos y en sus efectos dentro del proceso.

Al respecto, nos adherimos a la definición del español FAIREN GUILLEN: “‘Forma’ en sentido amplio, es el ‘procedimiento’. Y las faltas de los actos procesales, pueden producir, bien su simple ‘irregularidad’ -que no darán lugar sino a su subsanación y, en todo caso, a la imposición de una corrección disciplinaria- y la ‘nulidad’, en diversos grados. (FAIREN GUILLEN, Víctor: “Teoría general del derecho procesal”, 1era. ed., 1992, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie G,

Estudios Doctrinales, Nro. 133, p. 347.).

Siguiendo las ideas de ALVARADO VELLOSO, al establecer que “cuando las leyes en general refieren a la ‘inobservancia de las formas de un acto’, comprenden en rigor algo más que la pura forma: la propia estructura”.

Así, el citado autor descompone al acto procedimental en tres elementos (estructura): el sujeto que lo realiza, el objeto que procura y la actividad que necesariamente él efectúa para lograrlo.

- “1) El elemento sujeto permite analizar, respecto a todas las posibles personas que actúan procesalmente, su aptitud (capacidad y legitimación para obrar) y voluntad de actuar;
- 2) El elemento objeto permite estudiar la idoneidad del acto para producir efectos (eficacia), su posibilidad jurídica, su moralidad y, en particular, la correspondencia que siempre debe existir entre el contenido y la forma;
- 3) El elemento actividad cumplida permite analizar el cómo, dónde y cuándo se realiza. Es decir, la forma, el tiempo y el lugar donde el acto se cumple”.

Asimismo, el artículo IX del T.P. de nuestro CPC. Señala que “Las normas procesales contenidas en este Código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario. Las formalidades previstas en este Código son imperativas [...]”.

“Las formas, entonces, dejaron de ser un fin en sí mismas y hoy nos rige el principio de instrumentalidad, en virtud del cual el fin de los actos procesales es el que determina su validez o invalidez. Efecto de todo lo anterior, es también el principio de elasticidad o flexibilidad de las formalidades, que implica la adecuación de las exigencias formales al logro de los fines del proceso”.

La formalidad en el proceso juega un rol preponderante, se requiere de su utilización para dar seguridad jurídica y validez a los actos procesales; el omitirlas acarrea irregularidades, deficiencias, las que serán causas de un proceso nulo, generando la vulneración del principio constitucional del debido proceso. Sin embargo, el tener demasiada tendencia o religiosidad por las formas conlleva a lo que se llama “formulismo” (exacerbado culto o predilección por las formas), lo que también es perjudicial para un proceso.

### **2.2.3.- DEFINICIÓN**

El fundador de la escuela de La Plata, HUGO ALSINA, refiere “[...] que la nulidad es la sanción por la cual la ley priva al acto jurídico de sus efectos normales cuando en su ejecución no se han observado las formas prescritas para ello; pero debemos advertir que éste es un concepto provisorio, porque la función de la nulidad no es propiamente asegurar el cumplimiento de

las formas, sino de los fines asignados a éstas por el legislador [...]”.

GOZAINI, nos dice “el recurso de nulidad es un medio de impugnación por el cual se invalidan aquellas resoluciones judiciales que no cumplen las formalidades prescriptas por la ley, sea por defectos de la forma de las mismas o por violación de las formas determinadas, a los fines de guardar los principios de plenitud, congruencia y defensa en juicio”. (GOZAINI, Osvaldo: “Elementos de derecho procesal civil”, 1era. ed., 2005, EDIAR, Buenos Aires, p. 447).

Este autor señala que “las nulidades suponen vicios que hacen revocables los actos”.

En un estudio efectuado por ANGELICA FERREYRA DE LA RUA se afirma que “La nulidad procesal es una sanción por la que se priva de efectos a un acto o a un procedimiento en virtud de existir vicios que afecten garantías constitucionales. Se dice que es una sanción por cuanto aplica al acto jurídico que ya ingresó en la trama del proceso; en este aspecto, y en abstracto, se le define como una conminación de invalidez o de ineficacia que se cierne sobre un acto en particular cuando exhibe irregularidad”; cabe precisar que “la declaración de nulidad no se justifica por el solo incumplimiento de los requisitos legales impuestos por la ley;

es necesario que además, el acto no sea apto para lograr la finalidad para la cual ha sido realizado”.

Con acertada lógica COUTURE expresa la siguiente proposición: “siendo el derecho procesal un conjunto de formas dadas de antemano por el orden jurídico, mediante las cuales se hace el juicio, la nulidad consiste en el apartamiento de ese conjunto de formas necesarias establecidas por la ley”.

Fernando Canosa Torrado, en su libro “Las nulidades en el derecho procesal civil”, señala que, a las nulidades procesales se las define como la sanción que ocasiona la ineficacia del acto, a consecuencia de yerros en que se incurre en un proceso. Se las designa también como fallas in procedendo o vicios de actividad, cuando el Juez o las partes, por acción u omisión infringen las normas a las cuales deben someterse inexcusablemente, pues ellas les indican lo que deben, pueden y no pueden realizar.

EL referido autor también señala que sólo queda legitimado para alegar la nulidad quien a causa de la irregularidad ha sufrido un perjuicio, o ha encontrado menoscabo de sus derechos, pues si a pesar del vicio, el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa, no es posible entonces solicitar la invalidez del proceso, vale decir, no hay

invalidez por invalidez, sólo si el yerro causó algún perjuicio al litigante.

Actualmente se consideran como vicios que acarrean la nulidad no sólo los de forma (vicios extrínsecos) como se puede observar de los conceptos de los autores citados-; sino también los de fondo, esenciales o de contenido (vicios intrínsecos), cuando estos tengan relación directa con una formalidad legal; pues lo trascendente en la figura tratada es que un acto procesal carezca de eficacia y que perjudique a las partes, así como a la correcta administración de justicia, por eso es que ésta puede ser solicitada por las partes como también declarada de oficio. En ese sentido, el profesor ROGER ZAVALETA nos alerta que “[...] el terreno se vuelve escabroso y se multiplican las discrepancias cuando se pretende establecer cuáles son los vicios que originan a la nulidad procesal [...]”.

Al respecto traemos el argumento de PALACIO, que entiende la nulidad procesal como “la privación de efectos imputada a los actos del proceso que adolecen de algún vicio en sus elementos esenciales y que, por ello, carecen de aptitud para cumplir el fin a que se hallen destinados”, son de la posición de que existen nulidades procesales de fondo.

Tomando esta última posición doctrinaria –muy razonable-, ya que todo acto procesal si bien es revestido de formalidades

por la misma naturaleza del proceso, también contiene elementos de fondo, ya que estos son primordiales y presupuestos para la existencia y validez de los otros (v.g. la capacidad de las partes, los vicios del consentimiento, por ejemplo, carece de validez el testimonio de alguien privado de discernimiento, o una demanda planteada por un menor de edad, etc.); sin embargo, en un proceso, estos últimos, son residuales, mientras que los otros son pan del día.

Asimismo, de antemano cabe mencionar que existen discrepantes puntos de vista acerca de la “*naturaleza*” de la nulidad procesal como medio impugnatorio, cuando de un lado se arguye que es un *remedio*, o de otro lado, los que señalan que es un *recurso*.

Dentro de los primeros encontramos, entre otros, a la nulidad, los cuales tiene como fin el cuestionar los actos procesales no contenidos en resoluciones (v. g. una audiencia, un acto de notificación, un edicto judicial, etc.); mientras que dentro de los últimos encontramos a la apelación, la casación y otros, los cuales están destinados a atacar un acto procesal contenido en una resolución (decreto, auto y sentencia). No obstante, como bien se hace ver, en algunas ocasiones se encuentra a la nulidad cuestionando también actos procesales contenidos en resoluciones. Por ello se ha precisado que “la nulidad procesal es un medio impugnatorio muy particular, en



algunos casos será un remedio y en otros un recurso, y ello dependerá de si el acto procesal que se cuestiona está o no contenido en una resolución”.

Sin embargo, advertimos algo: El definir a la nulidad como medio impugnatorio no la abarca integralmente. En efecto, es bien sabido que los medios impugnatorios no pueden ser solicitados o ejercidos por el juez, sino solo por las partes y los terceros legitimados. Entonces nos preguntamos: ¿y dónde queda la nulidad cuando no es peticionada por éstos, sino declarada de oficio por el juez? Escapa este aspecto a la definición de medio impugnatorio, la cual resulta estrecha, recortándole así su versatilidad como figura procesal.

En cuanto al concepto de nulidad, nuestra jurisprudencia en la Casación N° 2758-2004-LIMA, del 10/03/06 ha expresado: “la nulidad es un remedio procesal destinado a dejar sin efecto actos procesales que incumplan con los requisitos y formalidades esenciales e insubsanables”. Asimismo, en la Casación N° 1349-2008-LA LIBERTAD, del 04/09/08, se expresa: “la contravención al derecho al debido proceso, entendida como aquel estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de algunos de los elementos constitutivos o en vicios existentes sobre ellos potencialmente lo colocan en situación de ser declarado

judicialmente inválido es sancionada ordinariamente con la Nulidad Procesal”

#### **2.2.4.- VICIOS QUE DAN ORIGEN A LA NULIDAD**

Esta parte de la doctrina como ya se ha venido esbozando y lo demuestra Zavaleta no resulta pacífica. Anteriormente fue muy aceptada la teoría (que tuvo entre sus exponentes a Couture y Alsina) de que los únicos vicios que dan origen a la nulidad procesal son los vicios *extrínsecos*, es decir aquellos que tienen que ver con las formalidades (forma) de los actos, que es uno de los elementos del acto jurídico.

En cambio, una postura más reciente y ya ampliamente aceptada pero no por ello menos polémica (entre los que se cuenta a Esclapez, Berizonce, Maurino y Peyrano, todos ellos integrantes de la reconocida y afamada *escuela de La Plata*), considera que la nulidad procesal también se puede originar en vicios *intrínsecos*, es decir aquellos que tienen que ver con los otros elementos del acto jurídico (la voluntad, el objeto y la causa). Precisamente, expresa Peyrano lo siguiente: “Ya hace casi cinco décadas, *Esclápez* preconizaba que también el acto procesal puede padecer de vicios intrínsecos o de contenido (por ejemplo, error, dolo o intimidación) que conspiran contra su validez igual que los vicios extrínsecos o formales; que son los que, de ordinario, determinan la declaración de una nulidad procesal”.

El jurista peruano Carrión Lugo comparte la segunda posición, pues considera, por ejemplo, que “un acto procesal está viciado cuando éste no constituya la voluntad del agente, cuando haya sido practicado por persona absolutamente incapaz, cuando su finalidad es ilícita (causar daño a terceros), cuando sea producto de un acto fraudulento (una simulación, por ejemplo), cuando no se revista la formalidad que señala la ley, etc.”. No obstante él mismo hace la precisión, ya en párrafos anteriores anotada, de que la mayoría de los casos de nulidad se refieren a las formalidades de los actos procesales, como por ejemplo las que tiene que ver con el tiempo de su realización (v. gr. 5 días de plazo para contestar la demanda en el proceso sumario), con determinadas pasos a cumplir (v. gr. la proposición de fórmula conciliatoria en la audiencia respectiva), el lugar donde se realizan (v. gr. la inspección judicial), etc.

Por eso Hinostroza concluye que “si bien, por lo general, la doctrina encuentra en los aspectos de forma los vicios que generan la nulidad procesal, es de resaltar que no por ello se deben descartar a las anomalías intrínsecas del acto o vicios del consentimiento o de la voluntad (dolo, error, intimidación y violencia) como causas de dicha figura procesal”.

Por otra parte, también se señala que los vicios que dan origen a la nulidad procesal son los errores *in procedendo* en

el procedimiento, que son los que tienen que ver con las formalidades como se desarrolla el procedimiento. En tal sentido, se asegura que sus opuestos, los errores *in iudicando* en el juicio o razonamiento del juez-, que tienen que ver más bien con el fondo del asunto, no acarrearán nulidad, sino la revocatoria de la resolución cuestionada, que es un instituto procesal distinto; aunque tampoco resulta del todo pacífica esta posición pero es dominante.

#### **2.2.5.- CLASES DE NULIDAD SEGÚN LOS ACTOS PROCESALES**

No es pacífico en doctrina la taxonomía de las nulidades, quizá esto se debe a la transpolación de las nulidades civiles al proceso, sin embargo esas ideas ya han quedado un poco desfasadas, toda vez que la nulidad procesal tiene matices diferentes a los de la nulidad civil. No obstante ello, la terminología utilizada es semejante, difiriendo en el contenido y en la aplicación.

Para los efectos de este trabajo los desarrollaremos brevemente, sin entrar a las discusiones teóricas existentes, para tal efecto desarrollaremos la clasificación más común.

Conocida es la clasificación que toma como referencia los grados de ineficacia de los actos procesales viciados, en ese sentido COUTURE precisa que “siempre se han distinguido tres grados de ineficacia: en un primer grado, de ineficacia

máxima, la inexistencia; en un segundo grado, capaz de producir determinados efectos en condiciones muy especiales, la nulidad absoluta; en un tercer grado, con mayores posibilidades de producir efectos jurídicos, la nulidad relativa”.

#### **2.2.6.- PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LA NULIDAD PROCESAL**

Los principios son las bases, los fundamentos, los axiomas, las columnas que sostienen el andamiaje normativo, son fuente del derecho y permiten realizar la justicia. Para el tema que tratamos son de capital importancia los que mencionaremos y están positivizados en el CPC, otros son fruto de la doctrina (están implícitos), sin embargo todos coadyuvan a una mejor interpretación y aplicación del instituto en estudio.

##### **a) La inexistencia**

El maestro COUTURE, nos dice que la inexistencia es “el problema del *ser o no ser* del acto. No se refiere a la eficacia sino a su vida misma” (ej. una sentencia dictada por quien no es juez). Prosigue el jurista uruguayo, “el concepto de inexistencia se utiliza, pues, para denotar algo que carece de aquellos elementos que son de la esencia y de la vida misma del acto; un *quid* incapaz de todo efecto”.

Esto significa que es un acto que nace muerto, o peor, ni nace, pues carece de toda validez. No pertenece a la categoría de acto sino de hecho.

ALSINA precisa que “Son inexistentes los actos en que la omisión o la violación de una formalidad ha impedido su configuración jurídica, aunque de esa circunstancia ningún perjuicio derive para las partes. La inexistencia no necesita ser declarada, pero puede ser constatada en cualquier estado del proceso y no admite convalidación”.

“La fórmula que defina esta condición sería, pues, la de que *el acto inexistente (hecho) no puede ser convalidado, ni necesita ser convalidado*”.

#### **b) Nulidad absoluta o insaneable**

A diferencia de la inexistencia, la nulidad absoluta si tiene la categoría de acto jurídico, aunque gravemente afectado.

“Puede hablarse en él de existencia y de ese mínimo de elementos requeridos para que un acto adquiriera realidad jurídica. Pero la gravedad de la desviación es tal que resulta indispensable enervar sus efectos, ya que el error apareja normalmente una disminución tal de garantías que hace peligroso su subsistencia. Se decide, entonces, a su respecto, que una vez comprobada la nulidad, el acto debe ser invalidado, aun de oficio y sin requerimiento de parte interesada; y que una vez invalidado el acto, no es posible ratificación u homologación”.

“La fórmula sería, pues, la de que *la nulidad absoluta no puede ser convalidada, pero necesita ser invalidada*”.

Al respecto, por ejemplo, en la Casación N° 1854-2005-LAMBAYEQUE, del 10/04/07, se expresa: “la nulidad absoluta se presenta siempre que un acto procesal (o actos procesales cuyo conjunto hacen el proceso) adolezca de una circunstancia fijada en las leyes procesales como necesaria para que el acto produzca sus efectos normales”.

#### **c) Nulidad relativa, saneable o anulabilidad**

Manifiesta COUTURE que en este tipo de actos, “existe un vicio de apartamiento de las formas dadas para la realización del acto; pero el error no es grave sino leve. Sólo cuando haya derivado en efectivo perjuicio, podrá ser conveniente su invalidación”, este tipo de actos son convalidables o subsanables, “sus efectos subsisten hasta el día de la invalidación; y si esta no se produjera, la ratificación da firmeza definitiva a esos actos”.

“La fórmula sería la de que el *acto relativamente nulo admite ser invalidado y puede ser convalidado*”.

ALSINA citando a CHIOVENDA dice que “si la falta de un presupuesto de la relación procesal puede ser relevada de oficio, el acto es nulo; si sólo puede serlo a pedido de parte, es

anulable. Pero a diferencia de lo que ocurre en el derecho sustantivo, el acto nulo como el acto anulable requieren declaración judicial y mientras tanto producen sus efectos, pudiendo ser convalidados por renuncia expresa o tácita de aquel a quien perjudica. Puede decirse que cuando la exigencia de un presupuesto determinado es de interés público, su defecto debe tenerse en cuenta de oficio, y ese interés público existe no sólo cuando se trata de la observancia de aquellas normas que afectan directamente a la Constitución del Estado, sino, en un sentido más amplio, siempre que la falta de un presupuesto procesal pueda influir en el resultado final de un proceso”.

El tema de determinar cuándo estamos ante un acto pasible de nulidad absoluta, relativa o anulable no es nada fácil, en reiteradas ocasiones nuestro CPC lo establece, pero en otras no, es allí donde el tema se torna oscuro, a veces es algo subjetivo y por ende relativo (una semejanza resaltante entre estos tres tipos de nulidad es que pueden ser convalidadas, sin embargo, cabe precisar que algunos autores diferencian entre nulidad relativa y anulabilidad, pese a que en el ámbito civil se consideran como sinónimos), pues, queda a interpretación del juzgador, determinar en qué grado de nulidad se encuentra el acto procesal viciado. La cuestión pasa por verificar qué acto procesal se ha infringido, que



finalidad tiene, y si ha cumplido o no con ella; así como también establecer cuál es el requisito que se ha omitido, y precisar si es “esencial o accesorio”.

Nuestro CPC. en ningún artículo precisa sobre estos grados de nulidad, mucho menos de criterios para determinarlos, no obstante, en algunas normas, establece que determinado acto es nulo y las consecuencias que acarrea (por ej. el art. 437 del CPC.); entonces depende de la discrecionalidad del juez y, obviamente, a su formación o cultura jurídica (formalista o antiformalista), de que un acto sea considerado por él como nulo y volverlo a rehacer o convalidarlo (por ej. si en la hoja que contiene el pliego interrogatorio en sobre cerrado no se consigna la firma del abogado, si el juez es un formalista declara nulo tal acto; pero, si es antiformalista, o mejor principista, lo convalidará si el acto cumple con sus finalidades y no vulnera las garantías del debido proceso).

#### **2.2.7.- LOS PRINCIPIOS EN LA LEGISLACIÓN PROCESAL**

Los principios son las bases, los fundamentos, los axiomas, las columnas que sostienen el andamiaje normativo, son fuente del derecho y permiten realizar la justicia. Para el tema que tratamos son de capital importancia los que mencionaremos y están positivizados en el CPC, otros son fruto de la doctrina (están implícitos), sin embargo todos coadyuvan a una mejor interpretación y aplicación del instituto en estudio.

**a) Principio de especificidad o legalidad.**

Se sintetiza en la fórmula “*no hay nulidad sin ley*” (*pas de nulité sans texte*), lo que significa -siguiendo a VESCOVI- “siendo el principio la validez y la excepción la nulidad, dichos textos legales deben ser de *interpretación estricta*”. Este principio está plasmado en el artículo 171 *ab initio* del CPC. Esta máxima “implica que ninguna nulidad puede ser declarada si previamente no se encuentra contemplada en las leyes procesales”<sup>130</sup> (Vgr. arts. V 1er párrafo del T.P., 122 2do. párrafo, 108 último párrafo, 202, 521 primer párrafo del CPC).

Este principio, ha sido aceptado en su mayoría por los doctrinarios, sin embargo, la historia ha demostrado que no es totalmente eficiente (no es absoluto), porque surgen problemas que escapan al margen de la norma, y es imposible que el legislador prevea todos los casos en que se incurre en nulidad, en tal coyuntura mencionan los doctrinarios es que se ha creado la categoría de las denominadas “*nulidades implícitas*” (aquellas que no están previstas expresamente en la ley), está regulado en el art. 171 1er. párrafo parte *in fine* del CPC).

En aras de resguardar el debido proceso y no dejar en estado de indefensión a las partes aparece esta categoría

de nulidades (implícitas), abarcando aquellos casos de irregularidad de actos procesales no sancionados (explícitamente) con nulidad, aquellos actos viciados en el fondo, los que vulneran el debido proceso y aquellos que aun respetando la formalidad del acto procesal no cumplen con su finalidad causando perjuicio a las partes. Todos estos casos son excepciones al principio de legalidad (Vgr. arts. 130, 158, 204, 424, 471, etc. del CPC).

#### **b) Principio de Trascendencia**

Véscovi lo traduce en la siguiente expresión: “No hay nulidad sin perjuicio”. Con este principio se postula que “no procede [...] la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional”.

Couture lo expuso claramente de la siguiente manera: “No hay nulidad de forma, si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio”. Y es que, como lo expresa Zavaleta, “la sola presencia del vicio no es razón suficiente para que el juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere, además, que ese vicio sea trascendente; es decir que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial”.

En efecto, “no procedería la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades que requería el acto, causan a otro un daño que sólo podría ser reparado por esta vía excepcional”. (VALDIVIA GUEROLA, Gino M.: “Principio de trascendencia de las nulidades procesales: protegiendo el derecho al debido proceso”, en: Revista Jus Doctrina y Práctica, Nº 4, abril, 2007, Lima, edit. GRIJLEY, p. 287.)

A partir de ello se consideró que “quien alega la nulidad debe expresar el perjuicio sufrido”. Pero no sólo eso sino que, en realidad “son tres las condiciones que se necesitan para que se configure el principio de trascendencia: a) alegación del perjuicio sufrido; b) acreditación del perjuicio; y, c) interés jurídico que se intenta subsanar”. Nuestro ordenamiento procesal ha recogido este principio; es más, como muy bien lo resalta ARRARTE, “[...] nuestro Código va más allá de la exigencia de que sea el perjudicado quien solicite la nulidad pues determina que quien la pide debe además, precisar cuál es la defensa que dejó de utilizar, de este modo se evita el mal uso de la institución, esto es, con el único propósito de prolongar el proceso”

**c) Principio de Finalidad Cumplida**

Carrión Lugo dice de él: “Conforme a este principio los actos procesales no son nulificables si ellos han cumplido con su finalidad no obstante tener defectos de orden formal”.

Con este principio se le da un papel más activo y valorativo al juzgador, pues está en su apreciación razonada el determinar si un acto ha logrado su finalidad a pesar de haberse errado en las formas. Efectivamente, como se ha destacado, “las normas legales que regulan las nulidades taxativas, al ser ontológicamente generales y abstractas, no pueden prever las minucias del caso concreto, frente al cual el juez deberá crear una norma particular. Por tanto, si del análisis de ese caso el juzgador estima que el acto irregular ha cumplido con su función, aún exista norma expresa, aquel será válido”.

#### **d) Principio de Convalidación**

Expresa Arrarte que “en virtud del carácter excepcional que tiene la nulidad, se admite que los defectos formales de los actos, puedan ser saneados por la voluntad de la parte perjudicada con el incumplimiento de una formalidad”. A ello suma Couture que “en el derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento” y que, “siendo el recurso [de nulidad] la forma principal de impugnación,

su no interposición en el tiempo y en la forma requeridos, opera la ejecutoriedad del acto”.

Pero la inacción (o no impugnación) no es la única forma de expresar el consentimiento, pues también podría darse a través de la ratificación del acto viciado. En efecto, así se desprende de la definición de Zavaleta, cuando señala que, “por el principio de convalidación la parte perjudicada con el incumplimiento de una formalidad puede sanear el acto viciado, en forma expresa o tácita. Habrá convalidación expresa cuando la parte agraviada ratifica el acto viciado; la convalidación será tácita, cuando el facultado para plantear la nulidad no formula su pedido en la primera oportunidad que tuviera para hacerlo”.

Sin embargo, no debemos dejar de anotar que detrás de este principio se encuentra la idea de que “el derecho procesal está dominado por ciertas exigencias de firmeza y de efectividad en los actos, superiores a las de otras ramas de orden jurídico. Frente a la necesidad de obtener actos procesales *válidos* y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales *firmes*, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho”.

En ese mismo sentido Carrión Lugo establece que, “frente a los actos procesales afectos de nulidad tenemos la figura de la convalidación, que importa confirmar la

validez del acto. Es que en los procesos existen razones de seguridad y certeza jurídica de los actos, así como la cosa juzgada, que hacen que se apliquen en los procesos de convalidación de las nulidades, de manera que precluida una etapa del proceso no se pueda volver a una etapa anterior”.

Luego agrega: “La convalidación constituye realmente un remedio, un elemento saneador, para los actos afectos de nulidad. En vez de invalidar el acto se sana. La manifestación expresa o la manifestación tácita, que importan consentimientos, pueden ser los mecanismos de convalidación”.

**e) Principio de Conservación de los Actos Procesales**

Busca conservar el desarrollo del proceso, procurando evitar las interrupciones por nulidad. Su sustento se encuentra en que el proceso debe tender a su conclusión sin dilaciones, así como en el hecho de que las etapas del proceso son *preclusivas* y no se puede estar regresando a las anteriores si no hay una causa o motivo enteramente justificante.

En tal sentido opina Zavaleta Rodríguez cuando expresa que “toda nulidad implica un retroceso en el iter procesal; y, por consiguiente, mayor dilación; esto la convierte en un

remedio de *última ratio*, de uso limitado y excepcional”. Y luego agrega: “La regla, entonces, es la de la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de indefensión”

**f) Principio de Protección**

Se ha dicho que “la nulidad procesal está reglada por el principio de protección, que significa que toda alegación de nulidad tiende al amparo de un interés lesionado”.

También se dice que “uno de los presupuestos de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega”.

En tal sentido, “no procede [...] el pedido de nulidad de la parte que ha propiciado, permitido o dado lugar al *error in procedendo*, pues, de otro modo se premiaría la conducta del litigante que actuó con negligencia; y, si su actitud es dolosa, se fomentaría la temeridad. Este es el sustrato del principio de protección, que tiene su base en la doctrina de los actos propios, la cual aplicada al caso significa que nadie puede fundar una nulidad en su propia conducta, pues no tendría interés para proponerla; y, por consiguiente, carecería de legitimación”.

Al respecto acota Arrarte: “En nuestra opinión, la idea central es que el litigante que realiza el acto nulo no puede



tener la capacidad de elegir cuales deben ser sus efectos, es decir, aceptarlos si le son favorables o denunciar sus efectos si le son adversos, pues ello implicaría un atentado contra los principios de lealtad y buena fe procesal, y fomentaría que litigantes maliciosos siembren nulidades para posteriormente denunciar su presencia y retrasar el proceso”.

#### **g) Principio de Causalidad**

Este principio básicamente consiste en que “el acto declarado nulo afecta a los actos que depende de él”. (HUERTA RIOS, Hilda: “El incidente de nulidad procesal”, en: Revista de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte de Lima, Nº 03, mayo, 2001, Lima, Palestra Editores, p. 80.)

En efecto, el vicio que da lugar a la nulidad, sólo puede ser causa para afectar al acto procesal que lo contiene, no a otros que son ajenos, siempre y cuando se establezca la independencia de éstos.

Puede manifestarse de dos formas. Por un lado, que el acto viciado puede extender sus efectos a otros afines, debido a que la lógica secuencia del procedimiento así lo obligue. Como por ejemplo, cuando se declara la nulidad del emplazamiento a un codemandado, también tiene que declararse, por extensión, la nulidad del acto procesal que

en lo avanzado del proceso haya convocado a audiencia. Por otro lado, que el acto procesal declarado nulo no puede extender sus efectos a otros, si la secuencia del procedimiento no lo exige así porque que son independientes de él.

Como el caso en que en una misma resolución se haya proveído la excepción y la contestación de la demanda, y más adelante se advierta que la excepción fue presentada fuera del plazo; allí sólo corresponde la nulidad del extremo en que se admitió la excepción.

#### **h) Principio de Declaración Judicial**

Este principio no es muy tratado en la doctrina, quizá por el hecho de que, dada la particular naturaleza de la nulidad en el ámbito procesal (no hay nulidad ipso jure), no se ha generado discusión o polémica sobre su existencia y alcances.

Salas Vivaldi opina al respecto que “la nulidad no opera de pleno derecho, de modo que no basta el deseo de los litigantes para restar eficacia a un acto del proceso, sino que es necesaria la correspondiente declaración judicial”.

#### **LOS PRINCIPIOS EN LA LEGISLACIÓN PROCESAL.**

Los principios de la nulidad procesal los encontramos positivizados en la legislación procesal de la siguiente manera:

- El principio de Legalidad o especificidad lo encontramos expresamente plasmado en la primera parte del art. 171 Código Procesal Civil, cuando se señala: “La nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley”.
- El principio de Trascendencia lo encontramos positivizado en el art. 174 Código Procesal Civil, de la siguiente forma: “Quien formula nulidad tiene que acreditar estar perjudicado con el acto procesal viciado y, en su caso, precisar la defensa que no pudo realizar como consecuencia directa del acto procesal cuestionado. Asimismo, acreditará interés propio y específico con relación a su pedido”.
- El principio de Finalidad cumplida lo encontramos plasmado en el segundo párrafo del artículo 171 del CPC, de la siguiente manera: “Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de nulidad para la realización de un acto procesal, éste será válido si habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito”.
- El principio de Convalidación se encuentra recogido en los primeros párrafos del artículo 172 del CPC, de esta

manera: “Tratándose de vicios en la notificación, la nulidad se convalida si el litigante procede de manera que ponga de manifiesto haber tomado conocimiento oportuno del contenido de la resolución. Hay también convalidación cuando el acto procesal, no obstante carecer de algún requisito formal, logra la finalidad para la que estaba destinado. Existe convalidación tácita cuando el facultado para plantear la nulidad no formula su pedido en la primera oportunidad que tuviera para hacerlo. No hay nulidad si la subsanación del vicio no ha de influir en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal”.

- El principio de Conservación de los actos procesales no se encuentra recogido expresamente en alguna de las normas relativas a la nulidad procesal que contempla nuestro Código; pero sí se puede colegir su existencia a partir del sustrato de todas ellas o efectuando una interpretación sistemática de las mismas.
- Al igual que el principio anterior, el principio de Protección no se encuentra taxativamente previsto en la norma procesal, pero se puede inferir del conjunto de ellas, entre las que destacan las contenidas en los artículos 174 (ya antes transcrito) y 175, inciso 1 del CPC. Al respecto Arrarte, partiendo del enunciado en negativo del principio, es decir

del lado de que no se puede permitir la nulidad por actos propios, expresa: “Este principio se encuentra reconocido en el Código Procesal Civil, pero no como principio, sino como causal de improcedencia regulada en el artículo 175º, inciso 1)”. Tal norma establece: “El pedido de nulidad será declarado inadmisibile o improcedente, según corresponda, cuando: 1. Se formule por quien ha propiciado, permitido o dado lugar al vicio”.

- El principio de causalidad lo encontramos regulado en el artículo 173 del CPC, donde se señala: “La declaración de nulidad de un acto procesal no alcanza a los anteriores ni a los posteriores que sean independientes de aquél. La invalidación de una parte del acto procesal no afecta a las otras que resulten independientes de ella, ni impide la producción de efectos para los cuales el acto es idóneo, salvo disposición expresa en contrario”.
- El principio de Declaración Judicial, que tampoco está expresamente enunciado en nuestro Código Procesal Civil, puede ser evidenciado a lo largo del articulado que aquel le dedica a la nulidad procesal. El más concreto de dichos artículos es el 177, titulado como *Contenido de la resolución que declara la nulidad* y que empieza diciendo: “La resolución que declara la nulidad ordena...” Es obvio, pues, que quien emite las resoluciones es el Juez, por lo tanto

sólo con su declaración queda establecida la nulidad de un acto procesal.

#### **2.2.8.- REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA**

Expresa Hinostroza que “son requisitos fundamentales para solicitar la declaración de nulidad procesal los que a continuación se indican: a) Alegación del perjuicio sufrido; b) acreditación del perjuicio; y c) interés jurídico para pedir la nulidad”.

En efecto, se trataría en este caso de lo que la doctrina denomina como requisitos *generales* o genéricos, pues, de modo *específico*, las nulidades se sujetan a una serie de requisitos (*Vgr.* el hacerlo en la primera oportunidad que se tenga, que esté establecida en la ley, que no se haya convalidado, que no se trate de cuestión anteriormente resuelta, que se presente arancel judicial por dicho concepto, que el vicio a subsanarse influya efectivamente en el sentido de la resolución o en las consecuencias del acto procesal, etc.) que les son exigibles según se trate de tal o cual acto concreto bajo cuestionamiento. Veamos entonces los requisitos *generales*:

a) **Alegación del perjuicio sufrido.** Este requisito se encuentra previsto, junto con los otros dos antes

mencionados, en el artículo 174 del CPC, el cual expresa: “Quien formula nulidad tiene que acreditar estar perjudicado con el acto procesal viciado y, en su caso, precisar la defensa que no pudo realizar como consecuencia directa del acto procesal cuestionado. Asimismo acreditará interés propio y específico con relación a su pedido”.

En efecto, Maurino indica que “quien alega la nulidad procesal, debe mencionar expresamente las defensas que se ha visto privado de oponer, o que no ha podido ejercitar con la amplitud debida, pues toda sanción nulificatoria debe tener un fin práctico y no meramente teórico. Debe mencionarse cuál es el perjuicio real ocasionado”, y también agrega que para ello “no basta una invocación genérica, como sería decir, v.gr., ‘tenemos legítimas excepciones que oponer’, o la imprecisa fórmula ‘se ha violado el derecho de defensa en juicio’, sino que el interesado debe indicar [concretamente] cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido”.

**b) Acreditación del perjuicio.** El perjuicio sufrido debe ser acreditado por quien solicita la nulidad, el cual, como se dice, debe ser “cierto e irreparable”. El motivo por el cual se exige, a decir de Maurino, se funda en la “necesidad de diagnosticar jurídicamente si la irregularidad ha colocado o

no a la parte impugnante en estado de indefensión práctica”.

No obstante, tal como se indica, este requisito tiene sus excepciones, como las que especifica por ejemplo Hinostroza

- Cuando la nulidad se declara de oficio (porque el órgano jurisdiccional, después de constatar el vicio o defecto procesal, sólo le cabe presumir la existencia del perjuicio).
- Si se está ante nulidades absolutas (pues el perjuicio esta contenido implícitamente en la norma legal).
- -Si se trata de los vicios de la sentencia o cuando la violación está sancionada por una nulidad “automática”.

**c) Interés jurídico para formular la nulidad.** El interés jurídico se puede resumir en “el por qué se le quiere subsanar”. En efecto, dicho interés proviene precisamente del agravio sufrido. Por ello Carrión Lugo afirma que “el agravio que causa un acto procesal afecto de nulidad a quien es parte en el proceso es el que lo legitima para proponer su invalidación. El agraviado, por tanto, tendrá interés para reclamar la nulidad del acto”.

Pero además, nuestra norma procesal prevé que ese interés sea propio y específico, lo cual significa que quien



no ha sido afectado con el agravio no puede solicitarlo, mucho menos la parte que la ha propiciado (Art. 175, inciso 1 del CPC), así como también que tiene que especificarse el interés que lo mueve al pretender la impugnación del acto.

#### **2.2.9.- INADMISIBILIDAD E IMPROCEDENCIA**

En cuanto a la nulidad procesal, su inadmisibilidad e improcedencia están mencionadas en el artículo 175 del CPC. No obstante, tal como lo hace ver Carrión Lugo, nuestro Código al tratar estos temas no hace la diferencia sobre cuando procede una y cuando procede la otra. Sin embargo, ante tal situación se puede recurrir al artículo 128 del texto citado, el cual, refiriéndose a los actos procesales que presentan las partes al proceso, los diferencia de la siguiente manera: “El juez declara la *inadmisibilidad* cuando carece de un requisito de forma o éste se cumple defectuosamente. Declara su *improcedencia* si la omisión o defecto es de un requisito de fondo” (el resaltado y la cursiva son nuestros). En otras palabras, la primera figura se identifica con la forma (formalidades) del acto procesal, en cambio la segunda se identifica con el fondo del asunto que trata dicho acto procesal.

En base a ello, señala Carrión Lugo que, “bajo la orientación del numeral 128 (...), diremos que el pedido de nulidad será declarado inadmisibile cuando: a) se formule por quien ha

propiciado, permitido o dado lugar al vicio; *b*) se sustente en causal no prevista por el Código (art. 175°, incs. 1 y 2 CPC); *c*) se trate de una cuestión anteriormente resuelta, es decir cuando se repita el mismo pedido de nulidad que ya ha sido resuelto con anterioridad. El pedido de nulidad será declarado improcedente cuando la invalidez haya sido saneada, convalidada o subsanada (Art. 175°, incs. 3 y 4, CPC)”.

Sin embargo, por nuestra parte coincidimos con el análisis efectuado por el mismo autor pero en otra obra, donde establece que los incisos 1 y 2 del referido artículo son causales de inadmisibilidad y los incisos 3 y 4 de improcedencia, lo cual es concordante con lo previsto en los artículos 426 y 427 del CPC. (referentes a la inadmisibilidad e improcedencia de la *demanda*); más no así con lo previsto en los artículos 357, 358 y 359 del mismo cuerpo legal (referentes a la inadmisibilidad e improcedencia de los *medios impugnatorios*, entre los cuales se encuentra, por supuesto, la nulidad), que son los más directamente llamados a aplicarse en estos casos.

Por otro lado, de acuerdo a lo que comúnmente se realiza en la práctica judicial, es de tenerse presente que lo declarado *inadmisible* significa que puede corregirse o subsanarse en un plazo que dé el juez y luego continuar su trámite; en cambio lo que se declara *improcedente* ya no admite subsanación, pues

significa un pronunciamiento tajante, indefectible, sobre la no admisión de lo alegado o solicitado, y por lo tanto no puede seguir ningún trámite para subsanarse.

Sin embargo, es de precisarse que nuestra normatividad procesal civil también permite que, un pedido formulado por las partes del proceso, sea declarado inadmisibile sin admitirse subsanación; tal es el caso, de la inadmisibilidad de plano, contemplada en el segundo párrafo del artículo 301 del Código Procesal Civil, que señala que la tacha, la oposición o sus absoluciones, que no cumplan con los requisitos indicados, serán declarados **inadmisibles de plano** por el Juez en decisión inimpugnable; siendo el caso que, en dicho articulado no se precisa plazo alguno de subsanación.

Asimismo, en el artículo 367 del citado Código, referido a la admisibilidad e improcedencia del recurso de apelación, se hace mención a que si el apelante no subsana la omisión o defecto, se rechazará el recurso y el mismo será declarado inadmisibile, pero esta vez, claro está, sin opción a subsanarse.

Es decir, que el término inadmisibile no implica necesariamente que se tenga un plazo para subsanar; por ello, si se declara inadmisibile la nulidad invocándose el inciso 1 del art. 175 del CPC, no podría ser subsanada.

#### **2.2.10. TRAMITE DE LA NULIDAD PROCESAL**

El trámite de la nulidad está previsto en el artículo 176 del Código Procesal Civil. Por tal razón nos remitimos a sus pautas para establecer sus especificidades.

**a) Cuando es a pedido de parte. En primera instancia.**

Debe formularse en la primera oportunidad que se tenga, antes de la sentencia. En este caso, el Juez resolverá previo traslado (notificación) por 3 días a la otra parte.

**En el recurso de apelación de la sentencia.**

Ya sentenciado el proceso, sólo puede ser alegado expresamente en el escrito de apelación. En este caso, el superior<sup>163</sup> resolverá oyendo a la otra parte, en un auto de especial pronunciamiento (auto específico) o al momento de absolver el grado (auto revisorio).

**En segunda instancia.**

Cuando la nulidad se origina por vicio ocurrido en la segunda instancia, será propuesta también en la primera oportunidad que se tenga y debe ser resuelta en la misma sede, ya sea de “plano” (es decir sin más trámite) o corriendo traslado (notificación).

**b) Cuando es declarado de oficio.**

Los jueces también pueden declarar la nulidad (de oficio), en auto debidamente motivado, pero solo cuando las

nulidades son insubsanables, es decir aquellas que padecen vicios esenciales manifiestos, en el cual el error es tan influyente en el proceso que causa perjuicio a las partes y al proceso mismo.

En cuanto a esta potestad nulificante del juez, por ejemplo, en la Casación N° 1854- 2005-LAMBAYEQUE, del 10/04/07, se expresa: “frente a un vicio de tal consideración, cualquier órgano jurisdiccional por el sólo hecho de serlo tiene lo que en doctrina se llama potestad nulificante del juzgador y que ha sido acogido en el artículo ciento setenta y seis in fine del Código Procesal Civil, entendida como aquella facultad de declarar la nulidad aun cuando no haya sido solicitada, si considera que el acto viciado (incluso el proceso todo) puede alterar sustancialmente los fines abstracto y concreto del proceso y la decisión que en él va a recaer”.

Asimismo, en la Casación N° 4046-2008-LIMA NORTE, del 20/10/08, se expresa: “la Sala Superior expide una resolución inhibitoria habiendo ejercitado su facultad nulificante, acogida en el último párrafo del artículo 176 del Código Adjetivo; entendiendo tal facultad como aquella de declarar una nulidad aun cuando no haya sido solicitada, si considera que el acto viciado puede alterar sustancialmente los fines abstracto y concreto del proceso

y la decisión que en él va a recaer; lo que no puede constituir afectación del derecho al debido proceso o una formalidad procesal incumplida”.

#### **2.2.11. EFECTOS DE LA DECLARACION DE NULIDAD**

Los efectos están previstos en los artículos 173 y 177 del CPC. En ellos, entre otros aspectos, se impone que la resolución que declara la nulidad ordena la renovación del acto o actos procesales afectados y las medidas efectivas para tal fin, imponiendo el pago de las costas y costos al responsable. Asimismo se establece que, la declaración de nulidad de un acto procesal no alcanza a los anteriores ni a los posteriores que sean independientes de aquel. Ello implica que cuando el acto o actos procesales declarados nulos no son independientes, “por su comunicabilidad de efectos conducen la nulidad hacia los demás, sea hacia atrás o por los que se dieron con posterioridad al vicio”.

Alberto Hinostroza Minués señala que: “La nulidad opera únicamente respecto del vicio que la motivó, no invalidando éste la totalidad del acto, si no se afectan todos los elementos que lo conforman; así como tampoco se invalidan los demás actos del proceso, en la medida que éstos guarden autonomía, con relación al acto que adolece de vicio o defecto”.

Cabe mencionar la Casación 2227-2001- Ayacucho, que en su segundo considerando señala: “La contravención del derecho al

debido proceso es sancionado ordinariamente por el juzgado con la nulidad procesal, y se entiende por ésta, el estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de alguno de sus elementos constitutivos o de vicios existentes en ellos, que lo coloca en la situación potencial de ser declarado judicialmente inválido”.

También en doctrina se distinguen entre efectos que anulan un determinado acto procesal y efectos que anulan todo un proceso (son las llamadas *nulidades parciales* y *nulidades totales*, en ese orden). Cuando la gravedad del error es de tanta importancia que genera un acusado déficit en la validez absoluta del proceso, se anulará todo el proceso, debido pues a que en estos supuestos “se halla en juego las garantías constitucionales del debido proceso adjetivo, con sus tutelas esenciales en el derecho a ser oído, defensa efectiva, y sentencia fundada en motivos razonablemente obtenidos del análisis de la causa”.

Entonces, en los señalados en primer orden, se invalida uno o varios actos procesales específicos de los múltiples que contiene un proceso, y en los señalados en segundo orden se invalida todo el proceso, que es la sumatoria de todos los actos procesales realizados.

En suma, como muy bien se indica, “el efecto propio de la nulidad es volver las cosas a su estado anterior. Ello se

cumple retrotrayendo el procedimiento a la etapa procesal anterior al acto viciado. Las excepciones están dadas por los supuestos de nulidad parcial de actos que sean separables”.

A veces ocurre que, a lo largo del trámite del proceso, el Juez no advierte que se ha incurrido en nulidades insubsanables; y, por lo general, algunos abogados, no obstante a haberlo advertido, generalmente no le comunican dicho hecho porque prefieren utilizar ese error como medio de defensa, para después pedir la nulidad de dicho acto procesal y retrotraer el proceso al momento en que se produjo el mismo; invocándolo muchas veces como causal procesal de su recurso de casación, por haberse vulnerado las normas que garantizan el derecho a un debido proceso; es decir, el proceso llega hasta la Corte Suprema, que es la que, al declarar fundado el recurso de casación, declara nula la sentencia de vista, así como la sentencia de primera instancia e incluso podría declarar la nulidad de lo actuado hasta donde se cometió el vicio procesal; lo que quiere decir que se tendría que volver a tramitar el proceso.

Respecto a los vicios procesales que se cometen al interior de un proceso judicial, uno de éstos viene a ser las notificaciones que se realizan en forma indebida, dirigiéndose a un domicilio que no corresponde a la parte demandada o sin adjuntar las piezas procesales correspondientes; lo cual acarrea la



nulidad de dicho acto notificadorio; siempre que se verifique que no ha cumplido su finalidad, cual es la de poner en conocimiento al que se notifica, el acto procesal respectivo; o, ha causado perjuicio a la parte que invoca la nulidad.

Al respecto, el autor Alberto Luis Marino señala que “El efecto principal en el caso de invalidez del acto procesal de notificación es retrotraer el juicio al momento inmediatamente anterior a la notificación nulificada”.

El hecho de retrotraer el proceso al momento inmediato en se produjo el vicio causa perjuicio a las partes, ya que la tramitación de su proceso va a tardar más tiempo de lo que debiera, produce lentitud procesal; y, todo por omisiones o negligencias de los encargados de tramitar el proceso; es decir de jueces y auxiliares jurisdiccionales.

## **2.3. RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES EN LA DILACION DE LOS PROCESOS DE DIVORCIO POR CAUSAL.**

### **2.3.1. EL JUEZ Y SUS DEBERES COMO DIRECTOR DEL PROCESO**

- **Principio de Dirección del Proceso por el Juez**

También llamado principio de autoridad, nos refiere el profesor IDROGO que por este principio “el juez está obligado a dirigir personalmente todos los actos del

procedimiento y es responsable del retardo que ocasione a las partes por su negligencia, ejerciendo su cargo de acuerdo al Código Procesal Civil”. “En aplicación de este principio, manifiesta el citado profesor- el Juez se convierte en un verdadero conductor del proceso con los poderes que le otorga la jurisdicción y con plenas facultades de decisión para cumplir con la función pública, propia del nuevo sistema procesal que se implantó a partir de 1993 para alcanzar la paz social con justicia”.

El art. II del T.P. del CPC establece que ***“La dirección del proceso está a cargo del Juez (...)”***, concordado con el art. V del T.P. del mismo Código en cuanto prescribe: ***“El Juez dirige el proceso tendiendo a una reducción de los actos procesales, sin afectar el carácter imperativo de las actuaciones que lo requieran”***.

Cito a la Conferencia dada por el Vocal Supremo Manuel Sánchez Palacios el día 02 de agosto de 2005, con ocasión de la actividades conmemorativas del día del Juez, por cuanto, en ella han desarrollado ideas de cómo debería ser un Juez; señalando como una de sus observaciones “Que el Juez es la base de todo el sistema. No importa cuán perfecto sea un

ordenamiento jurídico, si no hay un buen Juez, los resultados serán deplorables. Por el contrario, aun cuando el sistema legal sea imperfecto, si los Jueces son buenos, sus decisiones serán aceptadas: legitimadas.

Es cierto que el rol del Juez es sumamente importante, ya que él es el director del proceso, quien debe estar consciente de que su labor es vigilar que los procesos judiciales sean tramitados en forma adecuada; lo que significa que debe realizar una labor de supervisión, respecto al trabajo que realiza el personal a su cargo; ello, con la finalidad de que el trámite del proceso sea realizado en forma adecuada, y sin errores que impliquen la declaración de nulidad de los actos procesales realizados en los procesos.

- **Principio de Impulso Procesal**

Conocido como impulso oficial o impulso autónomo “es el que permite poner en movimiento el proceso, de tal manera que no se detenga hasta que se ponga fin a la instancia. Estos actos de procedimiento pueden hacerse indistintamente: a petición de parte, de oficio por los órganos jurisdiccionales o por disposición expresa de la ley”.

“El principio de impulso procesal de oficio se fundamenta en la idea de que el Estado está interesado en la rápida definición de los procesos; es por esto, que a los jueces se les ha dotado de un instrumento procesal que les permita tomar iniciativa en la pronta solución de los conflictos de las partes sometidos a su competencia, permitiendo que los procesos continúen, no se detengan y que la administración de justicia sea dinámica, eficiente y oportuna para lograr la paz social”.

Este principio está plasmado en el segundo párrafo del art. II del T.P. del CPC, que a la **letra señala**: “El juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia (...)”

- **Los Deberes del Juez en el Proceso**

Muy aparte de la buena conducta moral que debe tener un Juez ante la comunidad, de su alto nivel cognoscitivo tanto en cultura general como en el derecho, y del gran espíritu de justicia que debe conllevar casi de manera innata, ya que según el maestro MONROY, el Juez realiza la “divina” función de hacer justicia y de decidir los derechos de las

personas. La suerte de los justiciables depende de quién es y de cómo es el sujeto en quien el Estado ha delegado funciones de alto valor: efectivizar la justicia.

Sin embargo, para no dejar al libre arbitrio o al subjetivismo de cada quien, el legislador ha creído conveniente positivizar algunos deberes correspondientes al Juez, ya que desde una perspectiva objetiva, el juez está se encuentra sometido a la ley, con la finalidad de que esta controle su función aplicadora del derecho. “Desde este punto de vista, por tanto, el sometimiento del juez a la ley resume una serie de obligaciones intrínsecas a la función judicial”; en consecuencia, aquí señalamos los correspondientes al trabajo que venimos efectuando, con la advertencia que, si no se cumplen, quien los detenta podría incurrir en responsabilidad, penal civil y administrativa.

El art. 48 del CPC prescribe “Las funciones del Juez y de sus auxiliares son de Derecho Público. Realizan una labor de conjunto destinada a hacer efectiva la finalidad del proceso. El incumplimiento de sus deberes es sancionado por la ley”.

El art. 50 contiene algunos deberes del Juez, siendo los pertinentes para este trabajo los siguientes:

“Son deberes de los Jueces en el proceso:

Dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal;

Dictar las resoluciones y realizar los actos procesales en las fechas previstas y en el orden que ingresan al despacho, salvo prelación legal u otra causa justificada;

Sancionar al Abogado o a la parte que actúe en el proceso con dolo o fraude”.

Estas son algunos de los principales deberes que el Juez, como director del proceso, tiene que tener en cuenta en cada proceso que se tramita en su Despacho, bajo responsabilidad, que ya se tratará en adelante.

Como se puede interpretar, estos deberes están referido al impulso del proceso, a que un proceso se ejecute de la mejor forma posible, observando las reglas procedimentales, los plazos, etc. y previendo la observancia del debido proceso, con la finalidad de realizar la justicia, y alcanzar los fines del proceso.

El Juez para ejercer en forma correcta sus funciones requiere de independencia política y administrativa (organización judicial), así como también de imparcialidad, ecuanimidad e igualdad.

Luis Pasara en relación al desempeño del Juez, citando a Iglesias de Usel 1976, señala que “La decisión judicial es un proceso mediatizado por numerosos rasgos personales del Juez. Su personalidad, mecanismos in o subconscientes, creencias, valores, opiniones, políticas y religiosas, su propia concepción del papel del juez y la imagen asumida del Juez ideal, sus actitudes frente a las normas del grupo y la censura extraprofesional que le merece su violación y las causas que en su opinión la originan, su visión de la sociedad y de lo que debe ser, etc. constituyen elementos decisivos, entre tantos otros que subyacen a la toma de decisión.

Si bien, lo señalado por Luis Pasara, no deja de ser cierto, porque el Juez tiene sus propios valores y opiniones sobre determinados asuntos; también es cierto que el Juez no debe dejarse llevar por subjetividades al momento de decidir, toda vez que su fallo final debe estar supeditado a las pruebas existentes en el proceso y no a las opiniones particulares que tiene sobre tal o cual asunto; lo que quiere decir, que al momento de resolver un caso tiene que liberarse de toda subjetividad y carga emocional que le produce el caso en concreto y debe resolver teniendo en cuenta cuál de las partes

procesales ha logrado acreditar su pretensión, y le ha producido convicción.

Javier de Belaúnde López de Romaña en su discurso dado con ocasión de celebrar del día del Juez, y ha referido lo siguiente: “El Juez debe tener presente que al momento de impartir justicia, al momento de resolver un caso no está resolviendo un caso aislado entre Pedro y Manuel; está resolviendo un conflicto de intereses sociales que muchas veces tiene una enorme repercusión en la vida social”.

Coincidimos con lo antes manifestado, ya que cuando un Juez resuelve un proceso, están en juego muchas cosas, empezando por el futuro de los propios litigantes hasta el futuro mismo de la sociedad; por eso es importante que los jueces asuman su función como corresponde, realizando un estudio minucioso y detallado de los casos que van a resolver, sin dejarse llevar por presiones de ninguna índole; resolviendo conforme a la Constitución y a las Leyes, y, de acuerdo a los medios probatorios existentes en el proceso.

Augusto M. Morello, en su obra *el Proceso Justo*”, refiere que convendría que los jueces cobraran sensibilidad extrema ante el problema del tiempo



procesal fuera de los relojes y de los calendarios, vivenciándolo como tiempo en la vida de una persona que les reclama administración de justicia. Asimismo señala que, el riesgoso futuro de cada decisión judicial que afecta a un justiciable es vivido por él en un presente de ansiedad, mucho más agudo cuando se trata de un proceso criminal.

Con relación a los deberes de los Jueces, Sergio Salas Villalobos manifiesta que “Los Jueces, además de impartir justicia. Realizan las siguientes funciones inherentes a su cargo: interpretan el Derecho y las normas, solucionan conflictos, desarrollan creatividad jurídica, imponen el orden social”. “El Juez debe estar capacitado para saber organizar más que ordenar”.

Esto significa que el Juez debe ser capaz de razonar en forma lógica y jurídica, por cuanto, al momento de aplicar una norma deben interpretarla, si es que ésta no es clara en su redacción, y si no existiera norma alguna que regulara determinada circunstancia, deberá ser capaz de encontrar una respuesta al caso en concreto, recurriendo a los principios generales del derecho o la costumbre, ya que no puede dejar de administrar justicia.

También, el mismo autor Sergio Salas Villalobos, sostiene que: “La selección de operadores (Jueces), debe apuntar a dotar al sistema de los más adecuados para el objetivo del sistema”.

Es decir, que la labor que cumple el Juez en la administración de Justicia es fundamental, y depende de su desempeño funcional para que los justiciables obtengan en forma oportuna la Justicia que esperan; y, por ello, es necesario que los que accedan a la magistratura tengan la formación necesaria para desempeñarse en el cargo como corresponde.

Actualmente, el organismo encargado de la labor de capacitación para jueces, fiscales, auxiliares de justicia y asistentes de función fiscal es la Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial; en el que periódicamente se imparten cursos, talleres, entre otros, con la finalidad de mantener actualizados los conocimientos de los operadores de justicia.

### **2.3.2. LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL**

Explica el procesalista, CAPELLETTI, que “el término ‘responsabilidad judicial’ es indudablemente ambiguo porque significa tanto ejercicio de un *poder* como la *responsabilidad* consiguiente”, sigue el italiano, “el poder

involucra no sólo un derecho sino también un deber; es un derecho-deber, de naturaleza pública, que tienen algunos órganos o personas –tribunales y jueces- para ejercer la función jurisdiccional de dictar sentencias”; y la consecuencia obvia “es que haya una responsabilidad directa de quienes ejercen esa función, y la posiblemente indirecta del Estado, cuando tales principios y normas son transgredidos”.

Advierte el citado profesor que “actualmente ha aumentado, junto con el poder de los jueces, la disconformidad de los litigantes por los fallos judiciales que afectan sus intereses, lo cual les lleva a cuestionar personalmente a la judicatura cada vez en mayor medida, sobre todo cuando se trata de derechos individuales”

- **LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL EN NUESTRO CÓDIGO PROCESAL CIVIL.**

Dejamos de lado el estudio histórico de este tema, para adentrarnos, brevemente, en las cuestiones fundamentales que han sido sistematizadas en nuestro Código procesal, ya que el legislador del 93 le dedicó algunos artículos a dicha institución, que al fin y al cabo es la responsabilidad extracontractual y la de

inejecución de las obligaciones aplicadas a la función judicial.

Nuestro Código procesal trata este asunto dentro de los procesos abreviados, específicamente en el Capítulo II, Subcapítulo 3 (responsabilidad de los jueces), artículos 509-518, en los cuales se explica el procedimiento para resolver una *litis* por responsabilidad judicial.

El artículo 509 del referido Código prescribe: "El Juez es civilmente responsable cuando en ejercicio de su función jurisdiccional causa daño a las partes o a terceros, al actuar con dolo o culpa inexcusable, sin perjuicio de la sanción administrativa o penal que merezca.

La conducta es dolosa si el Juez incurre en falsedad o fraude, o si deniega justicia al rehusar u omitir un acto o realizar otro por influencia.

Incurre en culpa inexcusable cuando comete un grave error de derecho, hace interpretación insustentable de la ley o causa indefensión al no analizar los hechos probados por el afectado. Este proceso sólo se impulsará a pedido de parte".

Para mejor entender, es preciso concordarlo con el artículo 145 del mismo Código, "Incurre en falta grave el Juez que, sin justificación, no cumple con realizar la

actuación judicial en la fecha señalada o dentro del plazo legal respectivo”.

Se observa de la lectura de estas normas que, en primer lugar, se tipifica la “responsabilidad civil”, es decir la que es indemnizable o resarcible pecuniariamente, dejando a salvo la administrativa y la penal para sus respectivos Códigos o leyes; también se menciona como elemento típico de la responsabilidad el “daño o perjuicio” que se cause por la ilicitud, negligencia o error en el actuar del juez a las partes o a terceros. Dicha responsabilidad es atribuible a título de “dolo o culpa inexcusable”, esto es manifestación de la responsabilidad subjetiva.

Para determinar tales actuaciones que conllevan a resarcir los daños causados a las partes o a terceros, lo primero en que se debe fijar es si el juez cumplió o no con lo prescrito en las leyes, con sus deberes jurídicos y morales, con los principios jurídicos, con la jurisprudencia vinculante, con la costumbre, en fin; todo aquello que conlleve a comportarse con derecho y justicia y el respeto máximo a la Constitución Política del Estado.

Asimismo, el artículo 516 del CPC refiere quienes son los obligados al resarcimiento: “La obligación de pago de los daños y perjuicios es solidaria entre el Estado y el Juez o

Jueces colegiados que expidieron las resoluciones causantes del agravio”.

- **Finalidad.**

Lo que se busca con este actual sistema de responsabilidad judicial, porque ha de saberse que no siempre fue así, y es que en tiempos pasados el juez gozaba de la misma inmunidad que el rey, y actuaba en nombre del mismo; el juez como la boca de la ley no se equivocaba. Actualmente se ha comprendido que el juez es un ser humano y como tal yerra, y que esos errores en un proceso- repercuten en los derechos de los justiciables; es por eso que tanto los actos negligentes, como aquellos dolosos tienen que ser indemnizados a favor de los justiciables; ya que sería ilógico que alguien acuda al poder judicial en busca de justicia y esta a parte de las vulneraciones a sus derechos que ya se han dado en el plano material, surjan en el proceso y precisamente por quien debe brindar justicia.

En ese sentido se persigue en el Juez o se espera de él un actuar diligente en la substanciación de los asuntos que sean de su conocimiento y además respetar y velar porque sean respetados los derechos de quiénes intervengan en el proceso.

En el caso del incumplimiento de alguno de los deberes legales el juez compromete la responsabilidad del Estado, al igual que su responsabilidad penal, civil y disciplinaria.

A parte de resarcir a quienes son perjudicados por la función jurisdiccional, la finalidad de la institución que ahora tratamos, es la de resolver el conflicto observando el debido proceso y configurar la paz social, para eso existe el proceso como un instrumento del derecho

### **2.3.3. RESPONSABILIDAD E INDEPENDENCIA JUDICIAL**

La relación entre responsabilidad e independencia judicial puede ser entendida de dos modos: o bien, como ideas opuestas, con lo cual la responsabilidad se convertiría en un límite para la independencia del juez; o bien como ideas interdependientes. Al respecto, MONTERO AROCA señala que “en España la responsabilidad [judicial] ha venido concibiéndose como la contrapartida de la independencia, como la otra cara de la moneda, y con ello se establece como una diferencia fundamental frente a otros países europeos en los que la responsabilidad se entiende como límite a la independencia y, por lo tanto, como ideas contrapuestas, en el sentido de que el incremento de la primera supone la disminución de la segunda”.

En efecto, la responsabilidad no cuestiona la independencia judicial, sino que la reafirma, pues ambas son interdependientes entre sí. “La independencia de la judicatura implica promover un juez imparcial y justo preservándolo de presiones externas”.

Por todo ello, la responsabilidad del juez sirve para asegurar también su independencia. Pero además, la independencia judicial de ningún modo puede significar impunidad. Es por ello que el juez debe ser consciente de que su labor puede ser controlada por un órgano distinto a él y que, independientemente de su origen interno o externo al poder judicial, deberá buscar que el juez cumpla con las reglas del debido proceso y la tutela judicial, aplique idóneamente la Constitución y las leyes, y cumpla con los deberes genéricos propios de su labor.

#### **2.3.4. RESPONSABILIDAD, EFICACIA Y EFICIENCIA RESPECTO A LA DEMORA DE LOS PROCESOS**

Parece pues que, al margen de una cierta inadecuación de nuestras estructuras procesales para enmarcar litigios de determinada índole, existe una clara tendencia hacia lo que podríamos denominar un abuso del derecho de defensa.



En este sentido, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha señalado hace ya algunos años- que la demora no sólo perjudica al afectado, sino que también dificulta la administración de justicia en sí misma, ya que no se posterga únicamente la rectificación del daño o la reivindicación de la persona injustamente acusada, sino que además se colman de causas los tribunales, se aumentan los costos para todos los litigantes, se obliga a los jueces a simplificar, y se interfiere con la pronta decisión de aquellos litigios en los que todas las partes muestran la debida diligencia y preparación para el juicio, viéndose todo el proceso recargado por la falta de organización y de solución a los problemas.

El análisis del problema de la morosidad en la administración de justicia no implica, desde luego, abandonar la consideración de la inobservancia en la práctica de los plazos previstos por las leyes de procedimiento.

Obviamente, es posible que la introducción de mejoras infraestructurales, organizativas y legales *arrastren*, por sí solas, una atenuación significativa de sus consecuencias. Sin embargo, la probable persistencia de conductas disfuncionales arraigadas consuetudinariamente constituirá un obstáculo insalvable.

La eficacia y la eficiencia de un proceso se miden en función de cada caso y de la conformidad de los justiciables y de la sociedad con lo resuelto y con la justicia en general, si un proceso soluciona el conflicto es eficiente, se realiza la tutela jurisdiccional efectiva, existe confianza en los Magistrados, y en el Estado como tercero que compone la Litis.

### **2.3.5. LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL, LAS NULIDADES Y LA DILACION PROCESAL**

Para el estudio de las nulidades procesales, pues hemos visto que ellas existen de manera exorbitante en un proceso, son recursos muy utilizados por los abogados para dilatar el proceso (cuando les conviene la demora), en otras ocasiones su uso es adecuado (cuando es utilizada para sanear el proceso de defectos).

El problema se presenta cuando el uso de las nulidades es irracional e indiscriminado tanto por las partes como por el juez, ya que afectan el debido proceso y el que éste se termine dentro de un plazo razonable, de tal manera que la demora del mismo no conlleve a la carga procesal ni a la afectación del justiciable.

Pues el Juez, como director del proceso y que por consiguiente debe dar impulso al mismo en

cumplimiento de las máximas garantías que establece la Constitución y las leyes para con los justiciables, a fin de solucionar el conflicto y establecer la paz social, pues debe tener mucho cuidado con los actos procesales que este realiza, y actuar conforme a derecho; asimismo, su deber especial de cuidado al pronunciarse sobre los pedidos nulidiscuentes, ya que en reiteradas ocasiones y en “n” procesos, son muy utilizadas, incluso en un solo proceso se encuentra varios de estos pedidos, procesos que ya han envejecido en el tiempo, gracias, obviamente a las nulidades.

Estas nulidades que entorpecen al proceso, que no permiten su curso normal, son peligrosas para las partes y para el Estado que le generan ingentes costos, por eso es que también se requiere de jueces antiformalistas, que apliquen antes que la ley a rajatabla los principios del derecho, que adviertan si los actos procesales han cumplido su fin (es decir, si resulta estrictamente necesario declarar la nulidad); es responsabilidad únicamente del juez.

Simplemente el tramitar una nulidad ya es pérdida de tiempo procesal, y obviamente material, cuanto más ser formalista y traerse abajo un proceso y anular actos procesales parciales y/o en el peor de los casos “todo

lo actuado” simplemente por falta de algún requisito que no es esencial y que no distorsiona el proceso ni perjudica a las partes; esto es trabajo en vano, tiempo inútil.

Si el juez o sus auxiliares actúan incorrectamente, el juzgador puede anular tales actos de oficio con tal de inmacular el proceso, sino lo hace ya incurre en responsabilidad, sea por culpa inexcusable o dolo; si las partes lo solicitan y pese a ello hace caso omiso, es totalmente responsable por su omisión. Peor sería el caso en que declare la nulidad de un acto procesal no habiéndolo o existiendo éste es subsanable o no es esencial.

Más allá del propio daño que pueda existir por declarar un acto(s) nulo(s) o anulable(s) pues lo repudiable es que el proceso se eterniza, la imagen del Poder Judicial está mellada por la fuerte carga procesal que tiene y por su lentitud en la resolución de los casos.

Cabe añadir que la responsabilidad del Estado en casos de error judicial está prevista en el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Cecilia Belsito y Andrés Carporale, en el libro “Tutela Judicial Efectiva”, señalan que, todos los derechos y

garantías reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, brindan a todos la posibilidad de una vida digna. El efectivo ejercicio de esos derechos y garantías es una responsabilidad de cada Estado en la organización de su sistema de Justicia.

En diversas sentencias, el Tribunal Constitucional español ha establecido, en este sentido, que una dilación indebida no necesariamente se produce por el mero incumplimiento de plazos procesales legalmente establecidos; introduciendo - fundamentalmente- el concepto de la *complejidad del litigio*.

La doctrina, sin embargo, sostiene que al asumir el Estado el monopolio de la potestad jurisdiccional, reconoce a los ciudadanos el derecho a que, en la regulación del proceso, se establezcan plazos razonables y también a que esos plazos se cumplan. Afirma, entonces, que si la duración del proceso, en la práctica, es mucho más prolongada que la que establece la ley, el ciudadano no debería verse constreñido a admitir que el incumplimiento de la ley sea lo normal y, por lo tanto, a no tener derecho a exigir una indemnización razonable.

Entonces, es el Juez el llamado a tener mucho cuidado con la observancia del debido proceso, y el que

responde por los daños que se causen a los justiciables por la dilación del proceso.

### **2.3. DEFINICIONES OPERACIONALES.**

Para el desarrollo de la presente investigación es necesario precisar los siguientes términos operativos o claves operacionales:

#### **CELERIDAD PROCESAL**

Significa prontitud, rapidez y velocidad. A partir de esta significación, se puede conceptuar a la celeridad procesal como: “la prontitud de la justicia a través de la rapidez y velocidad del proceso; éste último concebido como un sistema de garantías”.

#### **CRITERIO DE RAZONABILIDAD**

Se define cuando el Juzgador vierte las razones que lo conducen a resolver, como también aquellas que demuestran como justiprecia los argumentos que han sido sometidos a consideración.

#### **EFICIENCIA**

Se refiere a la habilidad de contar con algo o alguien para obtener un resultado. El concepto también suele ser equiparado con el de fortaleza o el de acción. Por ejemplo: “Demuestra tu eficiencia para hacer este trabajo y te quedarás en la empresa”, “La eficiencia de este motor no puede ser discutida”, “Sin eficiencia, la existencia de esta oficina no tiene sentido”.

#### **REFORMAS PROCESALES**

Políticas públicas que tienen como objetivo incorporar los derechos humanos y los estándares internacionales sobre una materia a los

sistemas de administración de justicia, así como adecuarlos al desarrollo social, económico, político y cultural experimentado por la sociedad.

### **VERDAD JURÍDICA**

Es la afirmación jurisdiccional de la verdad histórica, sobre enunciados fácticos considerando que un evento punible requiere de afirmación jurídica a efectos de sancionarlo; pues como se sostiene en un hecho concreto el Juez no ha tenido acceso directo a los hechos, de modo que lo que inmediatamente conoce son enunciados sobre los hechos, cuya verdad hay que acreditarlo y que este proceso no es sino lo que se conoce como la verdad legal o verdad jurídica.

### **CAPÍTULO III**

#### **METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN**

#### **2.4. MÉTODO, TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN**

##### **2.4.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN**

En la presente investigación se utilizó los métodos generales tales como la inducción, deducción, análisis y síntesis.

La **inducción y deducción** para partir de los hechos particulares para llegar a conceptos generales y de ello deducir sus consecuencias lógicas.

El **análisis y síntesis** por la necesidad de dividir y estudiar las partes del estudio y luego recomponerlos.

(ASTI VERA, Armando, 2008).



#### **2.4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN**

El trabajo objeto de esta investigación se caracteriza por ser APLICADA; Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los resultados y avances de esta última.

#### **2.4.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN**

El nivel de investigación que se utilizó en la presente investigación es el nivel DESCRIPTIVO y EXPLICATIVO, Por cuanto las investigaciones de nivel descriptivo, consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores por lo que se refiere al objeto de estudio de examinar un tema o problema poco estudiado. Y del mismo modo el nivel explicativo trata de efectuar un proceso de abstracción a fin de destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran básicos para comprender los objetos y procesos. (ASTI VERA, Armando, 2008).

#### **2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES**

#### **2.6. HIPÓTESIS.**

##### **2.6.1. Hipótesis General.**

La nulidad procesal constituye una afectación a la tutela jurisdiccional produciendo dilación de los procesos de

Divorcio por causal, afectando el daño moral, psicológico y material del demandante y/o demandado.

#### **2.6.2. Hipótesis Específicos.**

- a) Si, los actos procesales generan nulidad procesal, entonces se originan la dilación en los procesos de divorcio por causal.
- b) El grado de responsabilidad que tienen los Jueces entonces afecta negativamente la ocurrencia de la nulidad procesal, en los procesos de Divorcio por causal.

#### **2.6.3. SISTEMA DE VARIABLES.**

- **VARIABLE INDEPENDIENTE**

Dilación en los Procesos de divorcio por causal

- **VARIABLE DEPENDIENTE**

Nulidad Procesal

#### **2.6.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN**

Con los datos cuantitativos y cualitativos de la información teórica y empírica, determinamos el efecto causal y de relación actuado por las variables independientes y dependientes. Por consiguiente, el diseño se manifiesta de la siguiente manera:

X ----- Y

Donde:

X = Observación uno = variable independiente

Y = Observación dos = variable dependiente

## **2.7. COBERTURA DE ESTUDIO**

### **2.7.1. POBLACIÓN**

La población estuvo compuesta por 150 expedientes relacionados al tema de investigación, correspondiente al año 2014 del Primer Juzgado de Familia de la Corte Superior de justicia de Huánuco.

40 Abogados Litigantes en la Provincia de Huánuco especialistas en materia civil.

### **2.7.2. MUESTRA**

La muestra está determinada por el muestreo NO PROBABILISTICO de manera empírica o azar por un total de 30 expedientes que corresponde al (20%) correspondiente al año 2014 del Primer Juzgado de Familia de Huánuco y 20 Abogados litigantes en la Provincia Huánuco, especialistas en materia civil.

### **2.7.3. UNIDADES DE ANÁLISIS**

Expedientes judiciales referentes al tema de investigación, contenidos en el período 2014 perteneciente al Primer Juzgado de Familia de Huánuco Y resultado de la encuesta realizados a los Abogados litigantes.

## **2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS**

### **A) PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS**

#### **TÉCNICAS**

**a) Observación**

Me permitió abstraer la información escrita de los documentos que obran en el Primer Juzgado de Familia de Huánuco.

**b) Encuesta**

A través de la encuesta me permitió obtener la información escrita de los instrumentos aplicados según la muestra propuesta.

**c) Entrevista**

La entrevista estuvo dirigida a los Abogados Litigantes en la Corte Superior de Justicia de la ciudad de Huánuco, a fin de recolectar la información para dar consistencia, confiabilidad y objetividad a mi trabajo de investigación.

**d) Fichaje**

Esta técnica permitió efectuar la revisión y extracción de aspectos teóricos procedentes de las fuentes bibliográficas, hemerográficas, videotecas, archivotecas e Internet a cerca de los tópicos relacionados a la investigación.

**e) Análisis documental**

Mediante el análisis documental me permitió abstraer los datos pertinentes al problema mediante el uso de fichas.

**f) Sistematización y codificación de datos**

Esta técnica me permitió estructurar en forma secuencial y Estratégicamente la documentación acopiada, a fin de elaborar el primer borrador de la tesis según el esquema de la EPG de la Universidad de Huánuco.

## **INSTRUMENTOS**

### **a) Cuestionario**

Este instrumento me permitió aplicar una encuesta de opinión mediante el listado de los enunciados con sus respectivas escalas valorativas, dirigidos a los Abogados Litigantes de la Corte Superior de Justicia de la ciudad de Huánuco, con la finalidad de recoger datos informativos a cerca del nivel de conocimiento.

### **b) Fichajes**

Este instrumento me permitió registrar los datos teóricos procedentes de las fuentes bibliográficas, hemorográficas, videotecas, archivo tecas e Internet.

### **c) Matriz de consistencia.**

Este instrumento sirvió para la estructuración, codificación y tabulación estadística de los datos que se obtendrán mediante la aplicación de la encuesta a los Abogados litigantes.

### **d) PARA EL PROCESAMIENTO Y PRESENTACION DE DATOS.**

Para el procesamiento de datos se utilizó las técnicas estadísticas elementales, como las frecuencias porcentuales y el promedio porcentual. Para la presentación de los datos utilizare cuadros y gráficos estadísticos.

**e) PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS**

Para analizar e interpretar los datos se utilizó los porcentajes, así como el promedio porcentual.

**f) PARA LA CONTRASTACION E INFERENCIA DE LOS RESULTADOS.**

Para la contratación de los resultados se utilizó cuadros y gráficos estadísticos.

## **CAPÍTULO IV**

### **RESULTADOS**

#### **4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN CUADROS Y GRÁFICOS.**

Después de aplicar los instrumentos, a la unidad de análisis y de haber logrado los objetivos planteados en la investigación.

Los resultados se han sistematizado en cuadros, tablas y gráficos, los mismos que se presentan a continuación:

#### **4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS ABOGADOS LITIGANTES.**

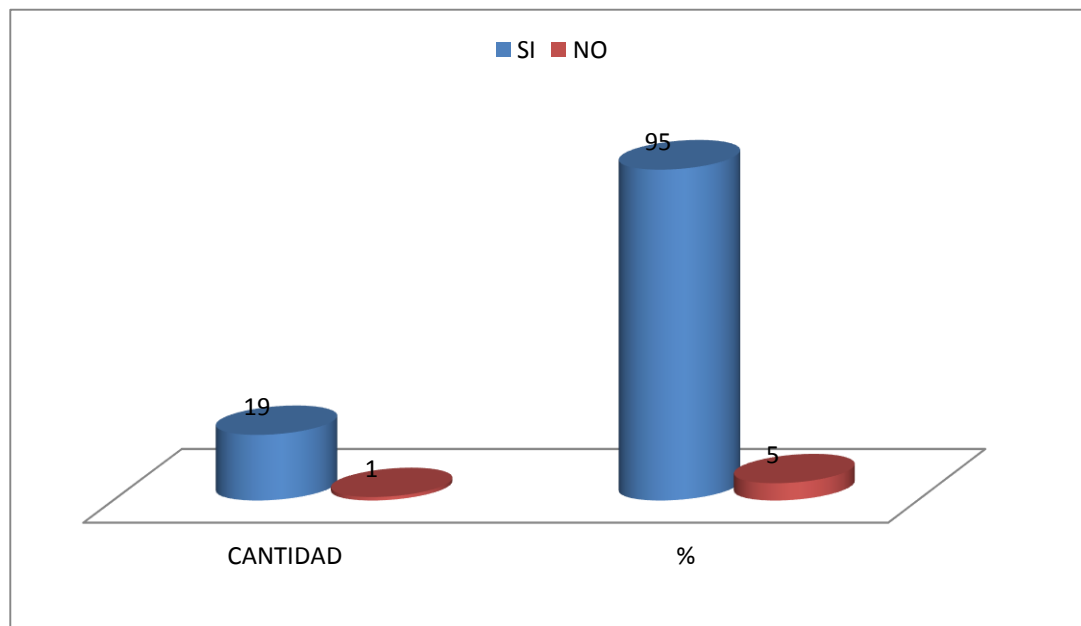
### CUADRO Nº 1

¿Conoce usted el instituto del proceso de divorcio establecido en el código procesal civil?

	CANTIDAD	%
SI	19	95
NO	1	5
	20	100

### GRAFICO Nº 1

¿Conoce usted el instituto del proceso de divorcio establecido en el Código procesal civil?



### ANÁLISIS DE RESULTADOS

A la pregunta ¿Conoce usted el Instituto del Proceso de Divorcio establecido en el Código Procesal Civil?, un 95 por ciento de los profesionales del Derecho, contestaron que conocen. Lo cual demuestra que casi todos están enterados de cómo se administra



justicia en los Juzgados de Familia de la Corte Superior de Justicia de Huánuco.

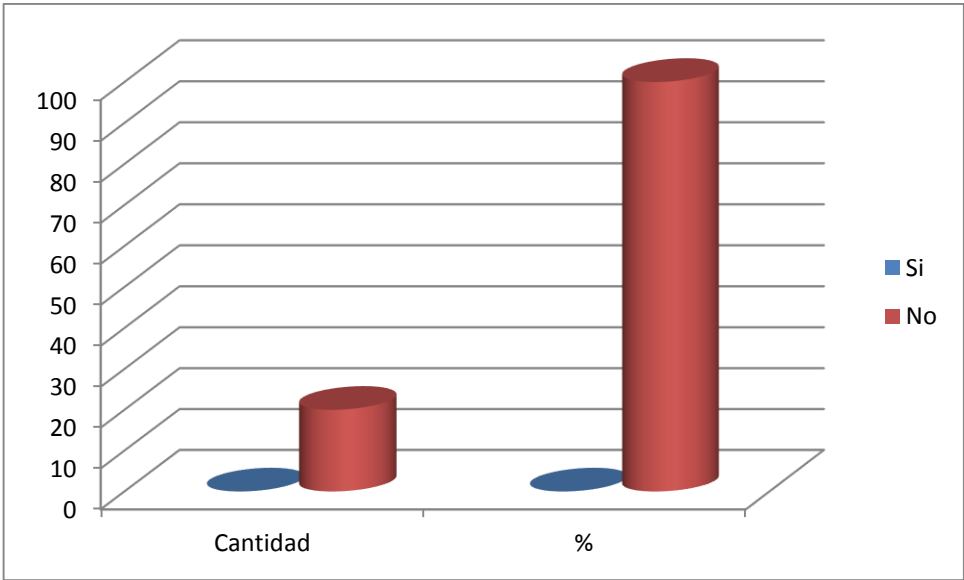
**CUADRO N° 2**

¿Cree Ud. que los jueces de los juzgados de familia de Huánuco conocen el instituto del proceso de divorcio establecido en el código procesal civil?

	Cantidad	%
Si	0	0
No	20	100
		100

**GRAFICO N° 2**

¿Cree Ud. que los jueces de los juzgados de familia de Huánuco conocen el instituto del proceso de divorcio establecido en el código procesal civil?



**ANÁLISIS DE RESULTADOS**

A la pregunta ¿Cree Ud. que los Jueces de los Juzgados de Familia de Huánuco conocen el Instituto del Proceso de Divorcio establecido en el

Código Procesal Civil?, un 100 por ciento de los profesionales del Derecho, contestaron que conocen. Lo cual demuestra que casi todos saben de cómo los Magistrados de los Juzgados de Familia de la Corte de Justicia de Huánuco, determinan sus sentencias.

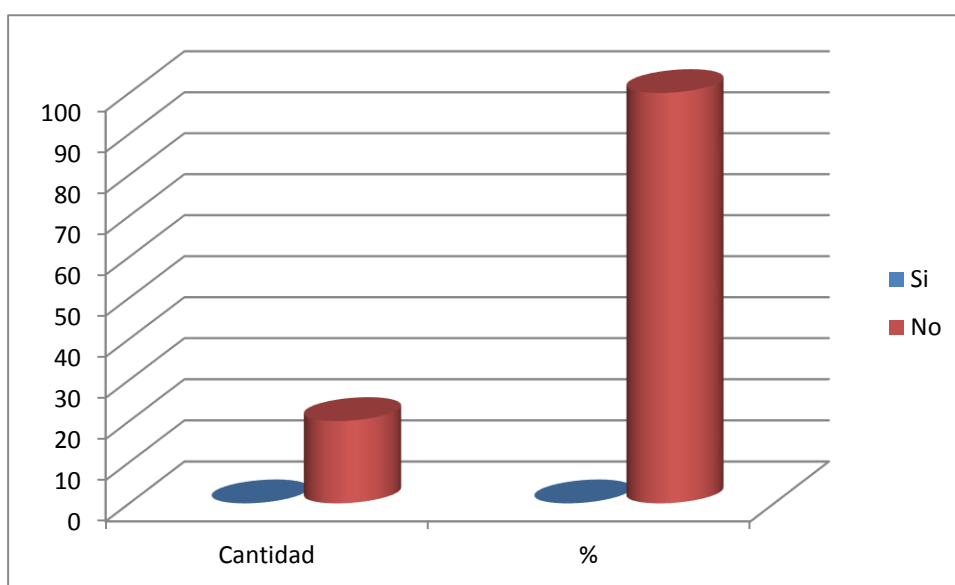
### CUADRO Nº 3

¿Cree Ud. que los jueces de los juzgados de familia de Huánuco aplican correctamente el instituto del proceso de divorcio establecido en el código procesal civil para administrar justicia?

	Cantidad	%
Si	0	0
No	20	100
		100

### GRAFICO Nº 3

¿Cree Ud. que los jueces de los juzgados de familia de Huánuco aplican correctamente el instituto del proceso de divorcio establecido en el código procesal civil para administrar justicia?



## ANÁLISIS DE RESULTADOS

A la pregunta: ¿Cree Ud. que los Jueces de los Juzgados de Familia de Huánuco aplican correctamente el Instituto del Proceso de Divorcio establecido en el Código Procesal Civil para administrar justicia? El 100% respondió que no lo aplica.

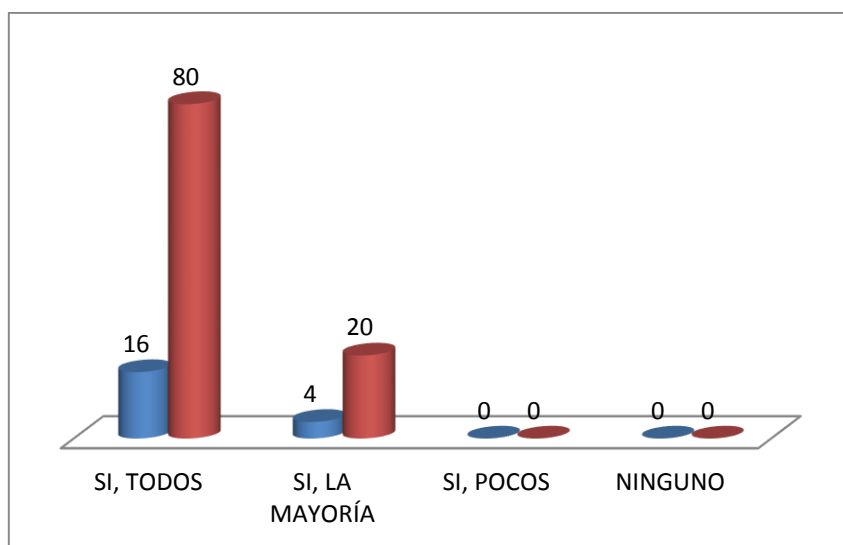
### CUADRO Nº 4

¿Cree usted que los jueces superiores de la sala civil de la corte superior de Huánuco, conocen el instituto del proceso de divorcio establecido en el código procesal civil?

	CANTIDAD	%
SI, TODOS	16	80
SI, LA MAYORÍA	4	20
SI, POCOS	0	0
NINGUNO	0	0
	20	100

### GRAFICO Nº 4

¿Cree usted que los jueces superiores de la sala civil de la corte superior de Huánuco, conocen el instituto del proceso de divorcio establecido en el código procesal civil?



## ANÁLISIS DE RESULTADOS

A la pregunta: ¿Cree usted que los Jueces Superiores de la Sala Civil de la Corte Superior de Huánuco, conocen el Instituto del Proceso de Divorcio establecido en el Código Procesal Civil?. La respuesta fue que un 80 % conoce es decir “El Juez conoce la Ley”; dejando en duda que un 20% desconoce o conoce poco su propio trabajo.

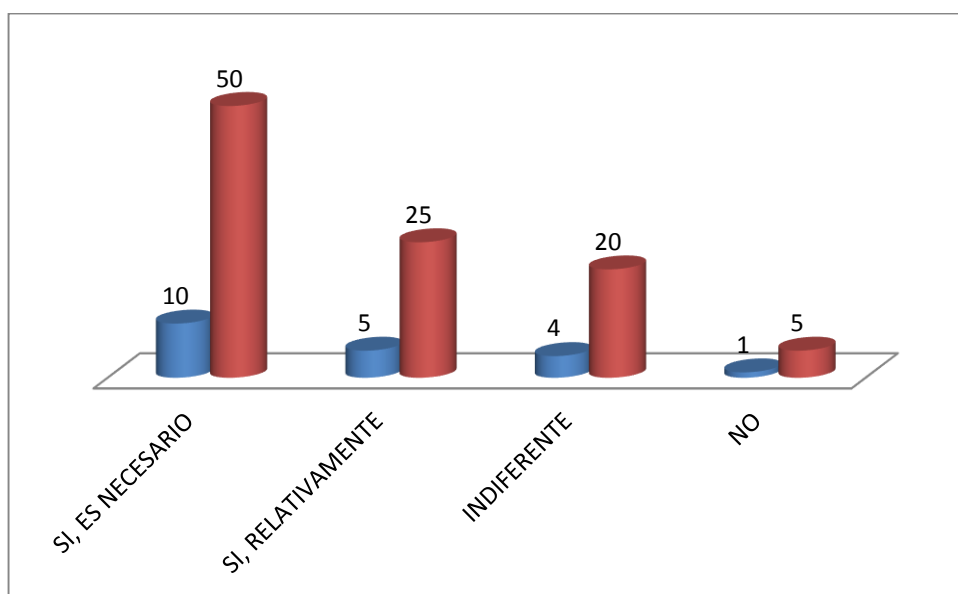
### CUADRO Nº 5

¿Cree Ud. que es importante la correcta aplicación del instituto del proceso de divorcio por causal para la administración de justicia?

	CANTIDAD	%
SI, ES NECESARIO	10	50
SI, RELATIVAMENTE	5	25
INDIFERENTE	4	20
NO	1	5

### CUADRO Nº 5

¿Cree Ud. que es importante la correcta aplicación del instituto del proceso de divorcio por causal para la administración de justicia?



## ANÁLISIS DE RESULTADOS

A la interrogante: ¿Cree Ud. que es importante la correcta aplicación del instituto del proceso de divorcio por causal para la administración de justicia?

Un 50 % respondió que sí y un 25% dijo que relativamente, o sea que no les resulta tan importante.

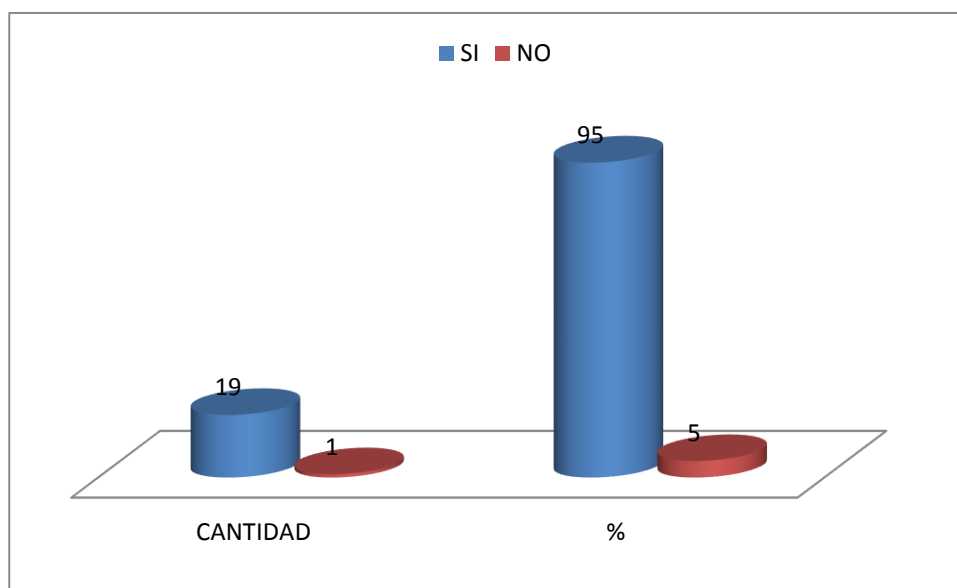
**CUADRO Nº 6**

¿Es necesario que los magistrados de los juzgados de familia apliquen correctamente el instituto del proceso de divorcio por causal para la administración de justicia?

	CANTIDAD	%
SI, MUY NECESARIO	19	95
NO ES NECESARIO	1	5
	20	100

**GRAFICO Nº 6**

¿Es necesario que los magistrados de los juzgados de familia apliquen correctamente el instituto del proceso de divorcio por causal para la Administración de justicia?



## ANÁLISIS DE RESULTADOS

A la pregunta ¿Es necesario que los Magistrados de los Juzgados de Familia apliquen correctamente el Instituto del Proceso de Divorcio por Causal para la Administración de Justicia?, un 95 por ciento de los profesionales del Derecho, contestaron que sí, es muy necesario. Lo cual demuestra que casi todos están enterados de cómo se debe administrar justicia.

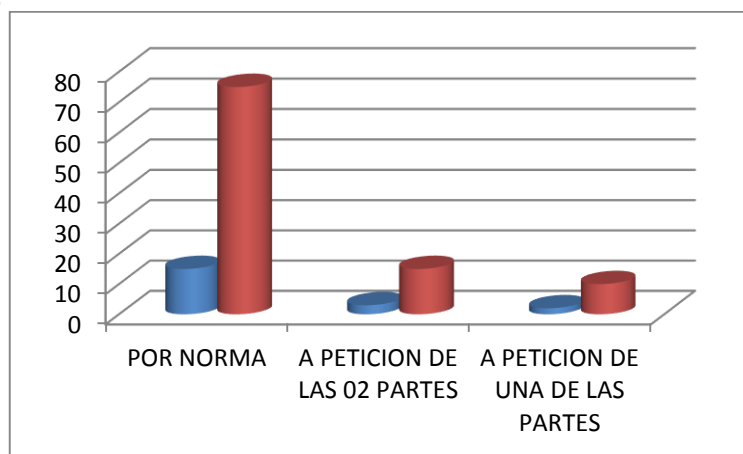
**CUADRO Nº 7**

¿si se aplica el instituto del proceso de divorcio por causal en el juzgado de familia de Huánuco con el código procesal civil, en qué sentido se está utilizando?

	CANTIDAD	%
POR NORMA	15	75
A PETICION DE LAS 02 PARTES	3	15
A PETICION DE UNA DE LAS PARTES	2	10
TOTAL	20	100

**GRAFICO Nº 7**

¿Si se aplica el instituto del proceso de divorcio por causal en el juzgado de familia de Huánuco con el código procesal civil, en qué sentido se está utilizando?



## ANÁLISIS DE RESULTADOS

A la pregunta: ¿si se aplica el Instituto del Proceso de Divorcio por Causal en el Juzgado de Familia de Huánuco con el Código Procesal Civil, en qué sentido se está utilizando?

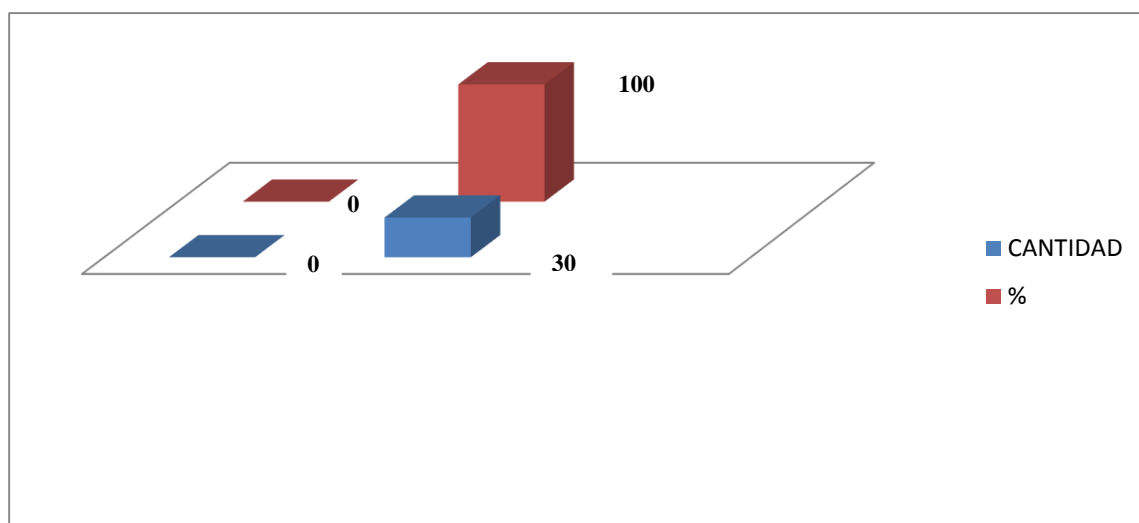
La respuesta del 75% de los señores abogados fue que si se aplica por norma, el 15% sería a petición de las partes y el 10% a petición de las dos partes.

#### 4.1.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE EXPEDIENTES:

### CUADRO N° 08

	Fi	%
APLICAN CORRECTAMENTE EL INSTITUTO DEL PROCESO DE DIVORCIO POR CAUSAL CON EL CODIGO PROCESAL CIVIL	0	0
NO APLICAN CORRECTAMENTE EL INSTITUTO DEL PROCESO DE DIVORCIO POR CAUSAL CON EL CODIGO PROCESAL CIVIL	30	100
TOTAL	30	100

### GRÁFICO N° 08



## **ANÁLISIS DE RESULTADOS**

LUEGO DE REVISAR POR MUESTREO, 30 EXPEDIENTES, LOS RESULTADOS FUERON LOS SIGUENTES:

- a) (0) APLICAN CORRECTAMENTE EL INSTITUTO DEL PROCESO DE DIVORCIO POR CAUSAL CON EL CODIGO PROCESAL CIVIL, haciendo un 0%
- b) (30) NO APLICAN CORRECTAMENTE EL INSTITUTO DEL PROCESO DE DIVORCIO POR CAUSAL CON EL CODIGO PROCESAL CIVIL, haciendo un 100%.



## **CAPÍTULO V**

### **DISCUSIÓN DE RESULTADOS**

#### **5.1. VERIFICACIÓN O CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS**

La hipótesis general planteada que a la letra dice: La nulidad procesal constituye una afectación a la tutela jurisdiccional produciendo dilación de los procesos de Divorcio por causal, afectando el daño moral, psicológico y material del demandante y/o demandado

Queda validada a través de la exposición de la investigación y apoyada por los resultados de la encuesta aplicada a los abogados litigantes en la Corte Superior de Justicia de la provincia de Huánuco.

La hipótesis general planteada es validada con los resultados de los gráficos N° 01 al 07 de la encuesta realizada a los abogados litigantes, así mismo de los resultados de los gráficos de los expedientes.

Considero que la nulidad procesal origina dilación en los procesos de Divorcio por causal; es decir, aquellos casos resueltos por el Primer Juzgado de Familia de la Corte Superior

de Justicia de Huánuco en el año 2014; ya que, al comprobarse dicha situación, se tomaran las medidas adecuadas para enmendar los errores en que se están incurriendo en la administración de justicia, justamente aquéllos que dilatan el proceso, haciendo que la decisión final se obtenga en un plazo demasiado lato y muchas veces irrazonable; que incluso puede llegar a convertir una sentencia en ineficaz, por su emisión tardía.

Un proceso tramitado con dilación, hace ineficaz a la administración de justicia; por cuanto lo pretendido por la parte demandante es resuelto con mucha demora, pudiendo darse el caso de que, cuando se emita la sentencia en forma definitiva, la referida sentencia ya no le sea beneficiosa al demandante, por haberse convertido su reclamo en irreparable, causando daño moral, psicológico y material.

No es posible que los justiciables permanezcan por tanto tiempo con la incertidumbre de no saber cuál de las dos partes, va a ser finalmente favorecido con lo que se resuelva en forma definitiva; por ello, todos aquellos que participen en la administración de justicia; vale decir, Jueces, Fiscales, Abogados, Auxiliares jurisdiccionales y Asistentes de Función Fiscal, deben asumir con conciencia de la labor que ellos realizan, y sobre todo ésta debe ser realizada con sumo cuidado, a fin de no perjudicar e incurrir en nulidades procesales, que a la larga van a ocasionar daño moral,

psicológico y material en el demandado y demandante, pensando que se tenga que declarar la nulidad del proceso, incluso, desde la resolución de autoadmisorio.

## **5.2. NUEVOS PLANTEAMIENTOS**

Con la presente investigación contribuimos en garantizar los derechos del demandante, como el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, la dignidad de la persona, y el derecho la reparación del daño.

Para evitar incurrir en nulidades procesales, las Cortes Superiores de Justicia deberían promover mayores programas de capacitación para sus integrantes, y además, cada Juez o Secretario Judicial también debería tomar conciencia de los puntos en los que debe capacitarse para mejorar su desempeño funcional.

Con el fin de no incurrir en nulidades procesales, los procesos deben tramitarse con el mayor cuidado posible; es decir, cada acto procesal por más sencillo que sea, que puede ser desde una notificación, hasta calificación de demandas, proveídos de escritos, sentencias, entre otros deben realizarse en forma adecuada desde el principio y seguir una secuencia en ese sentido.

Por lo que consideramos evitar incurrir en nulidades procesales que vician el proceso, sobre todo del Juez, ya que conforme a lo previsto en el artículo 50 del Código Procesal Civil, es el Director del Proceso y además debe velar por su rápida solución; lo que

implica que es él, el encargado de verificar que todos los actos procesales realizados al interior del proceso se hayan realizados conforme a Ley; lo que puede hacer cada vez que el secretario de la causa le dé cuenta de algún requerimiento efectuado por las partes y al firmar cualquier decreto y/o resolución; ello ahorraría el tiempo que se pierde cuando se incurre en una nulidad insubsanable, la cual debe declararse en aras de garantizar el debido proceso.

Por lo tanto la investigación debe ser tomada como un antecedente en la formulación de teorías ulteriores respecto a este tema.

## **CONCLUSIONES**

1. Se ha determinado que en la dilación de los procesos de Divorcio por causal, se ha incurrido en nulidad en las tramitaciones de los mismos; como consecuencia dichos procesos terminan en un promedio de 7 años, cuando en circunstancias normales, éstos procesos podrían haber culminado en 2 años aproximadamente.
2. Se ha determinado que los actos procesales excesivos es uno de los factores que se resuelve con mucha dilación; debiendo tramitar con mayor rapidez los procesos para evitar la carga procesal, y las autoridades del Poder Judicial, deben reorientar o dotar de mayor personal a los órganos jurisdiccionales donde lo requieran por la excesiva carga procesal a fin de cumplir con la celeridad procesal.
3. Se estableció que las nulidades procesales que vician el proceso fue responsabilidad del Juez, por ser el encargado de verificar los actos procesales, como también del secretario de la causa, por lo que no se garantizó el debido proceso.

## **SUGERENCIAS**

1. Para evitar incurrir en nulidades procesales, las Cortes Superiores de Justicia deberían promover mayores programas de capacitación para sus integrantes, y además, cada Juez o Secretario Judicial también debería tomar conciencia de los puntos en los que debe capacitarse para mejorar su desempeño funcional.
2. Con el fin de no incurrir en nulidades procesales, los procesos deben tramitarse con el mayor cuidado posible; es decir, cada acto procesal por más sencillo que sea, que puede ser desde una notificación, hasta calificación de demandas, proveídos de escritos, sentencias, entre otros deben realizarse en forma adecuada desde el principio y seguir una secuencia en ese sentido.
3. Si todos los procesos se tramitaran en forma adecuada, no habría motivo para que las Salas Superiores declaren la nulidad de los procesos por defectos formales, ya que los procesos estarían bien tramitados; por tanto, tendrían que emitir pronunciamiento sobre el fondo.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- ALSINA, Hugo. (2006). “Las nulidades en el proceso civil concepto y función de las formas procesales”, Ara Editores.
- ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos A. (2007). “Del formalismo en el proceso civil (Propuesta de un formalismo-valorativo)”, trad. por MONROY PALACIOS, Juan, 1era. ed., Palestra Editores.
- ALVARADO VELLOSO, Adolfo: “Introducción al estudio del derecho procesal”, primera parte, RUBINZAL-CULZONI EDITORES.
- ALZAMORA VALDEZ, Mario: “Derecho procesal civil: Teoría general del proceso”, Lima, s/a., edit. EDDILI, 8ava ed.
- ARDILA TRUJILLO, Mariana. (2009). “La prohibición de dilaciones injustificadas en la jurisprudencia constitucional”, en: Revista Derecho del Estado, N°. 23.
- ASTI VERA, Armando. (1993). Metodología de la Investigación. Tercera edición, Editorial Kapeluz. Buenos Aires, Argentina.
- ÁVILA ACOSTA, Roberto. (1998). Elementos de la Estadística Estudios y R.A, Lima.
- BANDRÉS, Casares, García Giner y Ramos. (2000) Los retos de la justicia en el siglo XXI. Estudis. Barcelona. Primera edición.2000.
- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales”, 25ava. ed., Editorial Heliasta.
- CANOSA TORRADO, Fernando. (1995). Las Nulidades en el

Derecho Procesal Civil. 2º Edición. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.

- CAPPELLETTI, Mauro (2009). “La responsabilidad de los jueces”, traducción de AMARAL, Samuel, Colección Monografías, v. 2, edit. COMMUNITAS, Lima.
- CARRION LUGO, Jorge. (2000). “Tratado de derecho procesal civil”, Tomo I, Lima, 1era. ed., Editora GRIJLEY.
- CARRION LUGO, Jorge. (1994). “El proceso civil como instrumento para el ejercicio de la función jurisdiccional”, MONROY GALVEZ, Juan y otros, Comentarios al Código Procesal Civil, Lima, edit. Cultural Cuzco S.A.
- COUTURE, Eduardo; (1988). “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, 3era. ed., 14ava. reimpresión, Ediciones DEPALMA, Buenos Aires – Argentina.
- CHAMORRO BERNAL, (2009). “Algunas reflexiones sobre el posible cambio de paradigma respecto a la Tutela Jurisdiccional Efectiva”, en: Ius Et Veritas, Revista editada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la PUCP, diciembre.
- DE BELAUNDE LÓPEZ DE ROMANA, Javier. (2006). La Reforma del Sistema de Justicia ¿en el camino correcto? 1º Edición. Lima, Fundación Konrad Adenauer.
- DEVIS ECHANDIA, Hernando. 1997 “Teoría general del proceso”, Buenos Aires – Argentina, 3era. ed. revisada y corregida, Edit. Universidad.



- ENRIQUE PALACIO, Lino. (2004) “Manual de Derecho Procesal Civil”, 18ava. ed., edit. Abeledo-Perrot, Buenos Aires – Argentina.
- FAIREN GUILLEN, Víctor. (1992). “Teoría general del derecho procesal”, 1era. ed., UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie G, Estudios Doctrinales.
- GIUSEPPE CHIOVENDA. (1988), cit. por MONROY CABRA, Marco: “Principios de derecho procesal civil”, 3ra. ed., TEMIS S.A., p. 243.
- GOZAINI, Osvaldo. (2005) “Elementos de derecho procesal civil”, 1era. ed., EDIAR, Buenos Aires.
- HERNÁNDEZ, Hugo. (2003) Indicadores sobre administración de Justicia: Mapa Judicial, presupuesto y eficiencia en el desempeño judicial. Justicia Viva, Lima.
- HINOSTROZA, Alberto. (2002) La Nulidad procesal (en el proceso civil). Doctrina y Jurisprudencia. Gaceta Jurídica. Lima. Agosto 2002.
- HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto: “Medios impugnatorios en el proceso civil: Doctrina y jurisprudencia”, Lima, 2da. ed. revisada y actualizada, edit. Gaceta Jurídica.
- HUERTA GUERRERO, Luis Alberto. (2003) El Debido Proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Comisión Andina de Juristas, Primera edición, Lima, Perú.
- IDROGO DELGADO, Teófilo. (2005) “Principios fundamentales y

reguladores del derecho procesal civil”, en: Principios Generales y Especiales del Derecho, 1era. ed., enero, MARSOL.

- MONROY PALACIOS, Juan José. (2004). La tutela procesal de los derechos. 1era. Edición. Lima. Palestra Editores.
- MONROY GALVEZ, Juan. (1996). Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Editorial Temis S.A. Santa Fe de Bogotá.
- PEYRANO, Jorge W. (2003) “Eficiencia del sistema de justicia”, en: Revista Peruana de Derecho Procesal, N° IV, Lima.
- QUIROGA LEON, Aníbal. (2006). El Debido Proceso Legal en el Perú en Ensayos Jurídicos Contemporáneos. Edición a cargo de Instituto Pacífico S.A.C. primera edición, Lima, Perú.
- RUBIO CORREA, Marcial. (2008). La Interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Segunda edición, Lima, Perú.
- SALAS VIVALDI, (2002) cit. por HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto: “La nulidad procesal (en el proceso Civil). Doctrina y jurisprudencia”, Lima – Perú, Edit. Gaceta Jurídica, 2da. ed.
- SANPIERI HERNÁNDEZ Roberto, FERNANDEZ COLLADO, Carlos - PILAR BAPTISTA, Lucio. (1999). Metodología de la Investigación. Editores Mc Graw Hill Interamericana Editores S.A de C.V. Segunda Edición.
- TAVARA Córdova, Francisco. ( 2009). Los Recursos Procesales Civiles. 1era. Edición. Lima, Gaceta Jurídica S.A.

- TICONA, Víctor. (1998). El debido proceso y la demanda civil, II Tomos. 1era. Edición. Lima, Editorial Rodhas.
- TICONA POSTIGO, Víctor. (1998). “Análisis y comentarios al Código Procesal Civil”, tomo I, Arequipa, 4ta. Ed., edit. SAN MARCOS.
- VALDIVIA GUEROLA, Gino M. (2007). “Principio de trascendencia de las nulidades procesales: protegiendo el derecho al debido proceso”, en: Revista Jus Doctrina y Práctica, N° 4, Lima, edit. GRIJLEY.

# ANEXOS

## CUESTIONARIO

DIRIGIDO A LOS ABOGADOS LITIGANTES DE LA REGIÓN HUÁNUCO

**TITULO: “DILACIÓN DEL PROCESO DE DIVORCIO POR CAUSAL PRODUCIENDO LA NULIDAD PROCESAL EN EL PRIMER JUZGADO DE FAMILIA DE HUANUCO 2014”**

**INSTRUCCIONES:** Responda los ITEMS marcando con una X dentro del paréntesis ( )

1. ¿Conoce usted el Instituto del proceso de Divorcio establecido en el Código Procesal Civil?

a) si ( )                                  b) no ( )
2. ¿Cree Ud. Que los Jueces de los Juzgados de Familia de Huánuco conocen el Instituto del proceso de Divorcio establecido en el Código Procesal Civil?

a) si ( )                                  b) no ( )
3. ¿Cree Ud. Que los Jueces de los Juzgados de Familia de Huánuco aplican correctamente el Instituto del proceso de Divorcio establecido en el Código Procesal Civil para administrar justicia?

a) si ( )                                  b) no ( )
4. ¿Cree usted que los jueces Superiores de la Sala Civil de la Corte Superior de Huánuco, conocen el Instituto del proceso de Divorcio establecido en el Código Procesal Civil?

a) si, todos ( )

b) si, la mayoría ( )

c) si, pocos ( )

d) nadie ( )

5. ¿Cree Ud. que es importante la correcta aplicación del Instituto del proceso de divorcio por causal para la Administración de Justicia?
- a) si, es necesario ( )
  - b) si, relativamente ( )
  - c) indiferente ( )
  - d) no ( )
6. ¿Es necesario que los Magistrados de los Juzgados de Familia apliquen correctamente el instituto del proceso de divorcio por causal para la Administración de Justicia?
- a) si, muy necesario ( )
  - b) no es necesario ( )
7. ¿Si se aplica el Instituto del Proceso de divorcio por causal en el Juzgado de Familia de Huánuco con el Código Procesal Civil, en qué sentido se está utilizando?
- a) por norma jurídica ( )
  - b) a petición de cualquiera de las partes litigantes ( )
  - c) a petición de una de las partes litigantes ( )
  - d) cuando se le ocurra al Magistrado ( )

**Gracias por su colaboración.**